

LA LECCIÓN DE CHILE

LAURENCE WHITEHEAD

INTRODUCCIÓN

¿PUEDE UN GOBIERNO democrático emprender una redistribución general y masiva del ingreso, de la riqueza y del poder sin tener que recurrir a la represión en contra de las clases que serían perjudicadas por este proceso? Los socialistas europeos han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la experiencia chilena se repita en países más “desarrollados” en caso de que intentaran llevar a cabo una redistribución de esta naturaleza a través de canales democráticos. Pero, ¿por qué se podrían derivar tales conclusiones sobre posibles desarrollos europeos a partir de un modelo latinoamericano aparentemente inaplicable? En muchos aspectos Chile estaba menos preparado para el experimento socialista que la mayoría de los países europeos. La estructura de clases era inapropiada, con una industrialización apenas parcial y un sector “proletario” limitado, y el Estado chileno era muy vulnerable a la oposición tanto externa como interna. Las condiciones adversas en el mercado mundial hacían más efectiva la hostilidad en el exterior —obstáculo muy severo, dado que se trataba de un país cuyas divisas extranjeras dependen básicamente de un solo producto, el cobre. Además, la resistencia interna fue más poderosa y más feroz de lo que se esperaba, puesto que la inminencia del conflicto y la violencia era mayor de lo que muchos observadores (yo mismo, así como muchos chilenos influyentes) tendían a suponer.

Por lo demás, la comparación con Europa no es del todo absurda. La democracia chilena gozaba de la protección de una estructura constitucional elaborada mucho más fuerte y antigua que la de los demás países latinoamericanos. Las condiciones políticas iniciales parecían relativamente favorables y el liderazgo de los partidos era experimentado, contaba con una gran habilidad táctica y era consciente de los peligros que suponía la “vía chilena al socialismo”. Su fracaso no se puede atribuir satisfactoriamente a algún factor accidental, como por ejemplo la traición de ciertos individuos, el sabotaje realizado por intereses propietarios políti-

camente aislados, o siquiera a un mero y convencional manejo erróneo de los asuntos de Estado. La causa del fracaso fue que la redistribución, en la escala que los líderes marxistas consideraban indispensable, generó un conflicto político de tal violencia que el país ya no pudo ser gobernado a través de los medios constitucionales. Tampoco podemos aceptar incondicionalmente la hipótesis de que el programa redistributivo de la Unidad Popular (UP) pudo haber sido realizado recurriendo a una estrategia más conciliatoria frente a la Democracia Cristiana (PDC), o que una vez lograda por otros medios, esa redistribución se hubiera podido sostener sin necesidad de una concentración dictatorial del poder del Estado. La trágica experiencia chilena plantea sin resolver de manera definitiva el problema de la compatibilidad de dos ideales, ambos elementos deseables para un orden socialista —o sea, un alto grado de igualdad social y un sólido sistema de derechos y garantías individuales.

Este problema no es una novedad. Los conservadores siempre han insistido en que llevar a cabo dramáticos experimentos intelectuales con el orden social establecido, haciendo a un lado el atractivo de los ideales en que estén basados, genera invariablemente resistencias y frustraciones tales que el nuevo orden únicamente puede mantenerse recurriendo a medios obviamente no idealistas, y que tales medios represivos a fin de cuentas distorsionan los objetivos supuestamente liberadores de la revolución. De manera similar los marxistas siempre han insistido en que las clases explotadoras no renuncian a sus privilegios fundamentales sin oponer fuerte resistencia, y que por lo tanto los revolucionarios no pueden permitirse ilusiones reformistas con base en un falso sentimiento de seguridad. Seguramente Allende escuchó semejantes advertencias en innumerables ocasiones antes de ser elegido (o siquiera postulado) para presidente. No obstante, antes y después de su elección, él siempre defendió la noción de una “vía chilena al socialismo” por medios pacíficos. Por ejemplo, en su primer mensaje al Congreso lo expresaba de la siguiente manera (21 de mayo de 1971):

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin tener que recurrir a formas autoritarias de gobierno. (Salvador Allende, *La vía chilena al socialismo*, Pelican, 1973.)

Como líder del partido primero y como presidente después, Allende

trató de reunir las fuerzas dispersas de la izquierda chilena para que apoyaran esta postura y, según creo yo, gobernó y murió siguiendo sus dictados.

El presente trabajo se divide en tres partes: la primera presenta una explicación de las razones por las cuales la mayor parte de la poderosa izquierda chilena y sus simpatizantes no solamente adoptaron la idea de que era posible una revolución social pacífica en su país, sino que *ésa* era la única vía factible para los socialistas chilenos; la segunda parte del trabajo expone algunas de las principales bases de la estrategia política del gobierno de la Unidad Popular y evalúa su validez a la luz de la experiencia de ese mismo gobierno; por último, la conclusión se refiere a las enseñanzas que podemos derivar de la derrota del socialismo en Chile.

¿POR QUÉ LA VÍA PACÍFICA?

Las facciones más importantes de la izquierda chilena nunca han sido incondicionalmente legalistas. Por ejemplo, el Partido Comunista chileno se mantuvo en la clandestinidad nueve años, después de haber sido declarado ilegal en el punto álgido de la guerra fría; el 6 de abril de 1957 el senador socialista Salvador Allende se pronunció por la resistencia total del Congreso frente a la acción del presidente (Carlos Ibáñez, 1952/58), quien, según Allende, había perdido toda legitimidad. Sin embargo, en cuarenta años de ininterrumpido régimen constitucional, tanto el Partido Socialista como el comunista han sido tan respetuosos del orden legal existente como sus otros contrincantes políticos de orientación igualmente constitucionalista, y esta postura relativamente legalista les trajo resultados favorables. El discurso inaugural de Allende (5 de noviembre de 1970) puso énfasis en el compromiso democrático de la UP:

Si nos detenemos a meditar un momento y miramos hacia atrás en nuestra historia, los chilenos estamos orgullosos de haber logrado imponer la vía política por sobre la violencia. Ésta es una noble tradición... la estabilidad institucional de la República fue una de las más altas de Europa y América... El respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro, es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos... Sin precedentes en el mundo, Chile acaba de dar una prueba extraordinaria de desarrollo político, haciendo posible que un movimiento anticapitalista asuma el poder por el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. (Salvador Allende: *Nuestro camino al socialismo*.)

De hecho, el primer éxito importante de la izquierda dentro del sistema constitucional había sido la victoria, por el margen más estrecho posible, en las elecciones presidenciales de 1938, la cual permitió al candidato radical (que encabezaba la coalición del Frente Popular) formar un gobierno reformista que incluía ministros socialistas y comunistas. En él, el joven doctor Allende fungió como ministro de Salubridad por un par de años. En los años cincuenta, los socialistas y los comunistas comprobaron una vez más que actuando dentro del sistema podían organizar un nuevo movimiento sindical bajo liderazgo marxista que, aunque apoyara un cambio revolucionario de las relaciones de poder y de propiedad, sería permitido siempre y cuando no desafiara abiertamente la ley. Después de la lucha que dividió a la izquierda en los últimos años de la década de los cuarenta, misma que favoreció que en 1948 fuera declarado ilegal el PC, su unidad fue restaurada con base en una política que, respaldándose en todas las garantías constitucionales, al mismo tiempo movilizaba el apoyo de las masas en favor de un programa socialmente revolucionario y cimentaba una base popular sorprendentemente amplia, como lo demostraron las elecciones de 1958, en las que el candidato a la presidencia, Salvador Allende, obtuvo el 28 por ciento de la votación, siendo derrotado por un margen muy estrecho por el principal candidato conservador. Por lo tanto, no resulta muy difícil de explicar la orientación constitucionalista de gran parte de la izquierda chilena. Sin embargo, cabe preguntarse por qué, a pesar del interés en mantener la democracia chilena, los partidos de la izquierda no sólo se comprometieron a realizar un programa de redistribución tan drástico, que seguramente sabían que pondría en tensión, hasta sus límites, la estructura institucional, sino también intentaron llevar a cabo y aun superar ese programa una vez que de manera tan inesperada y precaria llegaron al poder.

En 1970 Chile presentaba una situación singular en la que dos tercios del electorado se habían expresado en favor de una redistribución social más radical, mientras que las clases propietarias parecían haber perdido sus aliados políticos y sociales, así como los mecanismos defensivos que en la mayoría de las sociedades definen su supremacía. Baste señalar dos puntos en relación con este tema tan complejo: el primero se refiere a la estructura de propiedad y el segundo a la configuración del sistema de partidos que produjo estas condiciones históricamente extraordinarias. En cuanto al primer punto, algunos de los principales grupos propietarios se encontraban excepcionalmente aislados de lo que en sentido amplio podríamos llamar la "pequeña burguesía" y, asimismo, presentaban divisiones internas. Por ejemplo, para 1970 la población chilena había aumentado aceleradamente a casi nueve millones de habitantes, de los cuales

más de un tercio vivía en torno a la capital, Santiago. Como resultado de semejante proceso de urbanización y de los subsecuentes esfuerzos de los partidos urbanos por reclutar apoyo entre los campesinos, los grandes terratenientes habían perdido ya a principios de los años sesenta su preeminencia política. Más todavía, no habían logrado un aumento satisfactorio de la producción de alimentos para responder a una demanda urbana creciente y, por lo tanto, muchos tecnócratas gubernamentales los consideraban un obstáculo para la modernización eficiente de la economía. Cuando los Estados Unidos, atemorizados por la revolución cubana, también apoyaron la reforma agraria, los terratenientes chilenos se encontraron políticamente aislados y carentes de apoyo. En cuanto a otro segmento de las clases propietarias, vemos que las exportaciones chilenas estaban casi en su totalidad en manos de tres compañías cupríferas norteamericanas, de mucho mayor tamaño que cualquiera otra. Estas empresas eran también particularmente vulnerables a los ataques políticos (si se las compara con la mayoría de los intereses propietarios), tanto porque las grandes y poderosas corporaciones mineras generalmente tienden a provocar un resentimiento relativamente amplio aun entre los sectores acomodados de la opinión pública, como porque la propiedad extranjera resultaba ofensiva para los nacionalistas chilenos. Cuando el gobierno norteamericano empezó a presionar en favor de la reforma agraria, algunos conservadores chilenos respondieron adhiriéndose a la causa del nacionalismo antinorteamericano. De ahí que en la década de los sesenta pueda hablarse de un aislamiento político de las compañías mineras y de los terratenientes. El presidente democristiano Frei (1964/70) intentó aplicar fórmulas de compromiso y negociaciones tendientes a lograr una reducción gradual de su preeminencia. Pero estos cambios resultaron costosos, impopulares entre los grupos elitistas y demasiado lentos para la mayor parte del electorado. Fue así como en la elección de 1970 las compañías mineras advirtieron insistentemente a los propietarios de fábricas, a los ganaderos y demás grupos propietarios en el sentido de que si, como los mismos democristianos amenazaban, se nacionalizaban las principales firmas de la república sin que se elevara una protesta o se diera una compensación adecuada, todas las clases propietarias estaban en peligro. Sin embargo, en ese momento tales argumentos (que también expresaba por ejemplo *El Mercurio*, el 5 de julio de 1969) obtuvieron menos apoyo del que se hubiera podido esperar. Inclusive un grupo importante de propietarios contribuyó con fondos para las campañas de los tres candidatos presidenciales.

La alineación electoral de la opinión pública en esta época también ilustra el aislamiento político de lo que los marxistas llamaban el "capi-

talismo monopolista", y explica por lo demás la creación de la brecha que permitió que una minoría organizada de la población conquistara el poder y que lograra una posición (la presidencia) a partir de la cual pudiera impulsar una campaña en contra de los grandes terratenientes. Como consecuencia de su política de reforma agraria, el gobierno democristiano saliente había perdido el apoyo de los terratenientes y de otros grupos dirigentes, pero a pesar de esa política reformista tampoco había logrado cortar el paso a un movimiento obrero bajo liderazgo marxista, al tiempo que empezaba a agotar los créditos de la Alianza para el Progreso. (Fomentada por la Alianza, la deuda externa chilena se elevó de \$406 millones a fines de 1960 a \$1 813 a fines de 1967, pero fue posteriormente recortada, de manera que en diciembre de 1970 era de apenas \$2 029 millones.) Así pues, desde el punto de vista político partidista, dados los desalentadores resultados de los primeros seis años de reformas moderadas frente a las expectativas radicales de un electorado predominantemente pobre y subprivilegiado, muchos democristianos eruyeron que su única alternativa consistía en prometer más reformas y una redistribución más acelerada después de las elecciones de 1970, aun cuando al hacerlo se comprometieran con un programa que muchos de los líderes del partido consideraban en privado inaplicable. Tomic, el candidato presidencial de la democracia cristiana en las elecciones de 1970 (dado que según los términos de la Constitución Frei no podía ser reelegido inmediatamente), fomentó esta radicalización un tanto renuente del partido. Aun cuando Tomic era el heredero natural en la sucesión, tenía menos aceptación entre los votantes del ala derecha que la mayoría de los líderes del partido.

Esta simulada postura radical a que se vio forzada la democracia cristiana brindó a la UP, que ya contaba con el apoyo de por lo menos un tercio del electorado, una oportunidad excepcional, puesto que las fuerzas antimarxistas se encontraban casi igualmente divididas en cuanto a seguir adelante o echar marcha atrás en la política reformista existente. El frente unido de propietarios que se había formado con anterioridad había optado por una actitud defensiva desmembrándose en muchos grupos que calculaban los riesgos, y dado que el excepcional desarrollo del sistema institucional aseguraba derechos irrestrictos de organización política y de actividad electoral aun a los líderes marxistas que presentaban un programa social revolucionario. Desde la apretada derrota de 1958, o tal vez aun desde su experiencia en el Frente Popular de 1938, Allende había creído (así como lo creía el Partido Comunista) que estas características del sistema chileno abrían la posibilidad a una "vía pacífica al socialismo", de un tipo inaplicable en cualquier otro país latinoamericana-

no y, finalmente, en este su cuarto intento como candidato presidencial en elecciones democráticas tuvo la oportunidad de poner a prueba su teoría.

Quizá sea ésta la explicación del porqué se creyó en la posibilidad de una “vía pacífica” en Chile y de cómo surgió la oportunidad de probar tal posibilidad. Pero por lo menos al principio (y yo creo que durante todo el periodo presidencial allendista) Allende y sus colaboradores creyeron en más que eso. La “vía pacífica” no sólo era posible, sino que era también *la única posibilidad* de instaurar el socialismo en un país que presentaba las tradiciones de Chile en ese momento. (Este argumento fue analizado en la influyente publicación mensual *Panorama económico* en julio de 1971.) De esta manera, la UP se vio comprometida en la realización de dos objetivos igualmente ambiciosos y potencialmente inconsistentes —un programa radical de redistribución de la propiedad y de movilización de las masas en combinación con una continuidad institucional y con el mantenimiento de los derechos constitucionales de los contrincantes políticos. ¿Cuál fue la razón por la cual no moderaron sus objetivos de redistribución para salvaguardar el orden constitucional?; y, si esas concesiones habían de ser desechadas como traiciones a la revolución, ¿por qué no se enfrentaron en su totalidad las implicaciones de sus objetivos más fundamentales y se prepararon medios insurreccionales o dictatoriales que correspondieran a esas metas necesariamente revolucionarias?

Antes de pasar a examinar este problema se hace indispensable señalar que muchos de los opositores de la UP, y desde luego la actual Junta militar, han acusado al gobierno de Allende de repetidas violaciones a la Constitución, de perpetrar el fraude electoral, de ignorar los mandatos de la Corte, de crear fuerzas paramilitares y en términos generales de preparar el camino para el establecimiento de una dictadura. (Robert Moss en *Chile's Marxist Experiment*, New Abbott, 1973 insiste en esta postura.) Sin embargo, casi todas las instancias de la acción gubernamental mencionadas por estos analistas, más que evidenciar un intento serio de tipo dictatorial, me parecen pruebas de debilidad y de esfuerzos desesperados de autodefensa. Por ejemplo, en lo que se refiere al respeto a la Constitución, cada vez que el Senado procesaba a alguno de los ministros de Allende (lo cual sucedió en cuatro ocasiones) o de sus *Intendentes*, el afectado perdía su puesto aun cuando la oposición mayoritaria en el Congreso estuviera apenas dispuesta a un juicio justo. Por otra parte, dado que la Constitución chilena no descalificaba automáticamente a los procesados para ocupar otros puestos públicos (como lo establece la Constitución norteamericana), Allende soslayaba el espíritu del proceso

simplemente reacomodando su gabinete. (En cuanto a las acusaciones de fraudes electorales, a la libertad, por no decir el libertinaje, de la prensa de oposición ninguno de ellos podrá negar la intolerancia o aun las intenciones dictatoriales de algunos grupos importantes dentro de la misma UP, pero un observador honesto tendrá que aceptar que ellas encontraban su paralelo precisamente en la oposición. De hecho los dos extremos se nutrían mutuamente, con la extrema derecha superando a ambos, como lo sugiere el siguiente extracto de un debate en el Congreso (celebrado el 2 de julio de 1973, poco después de que una unidad de tanques había intentado atacar el palacio presidencial):

Jorge Inzunza (Comunista): "Los fascistas están siendo arrinconados como ratas".

Mario Arnello (Nacional): "Pero yo estoy aquí".

Mireyra Baltra (Comunista): "Sí, pero hasta cuándo?"

Domingo Godoy Matte (Nacional): "Hasta que se produzca el Yakarta".

(Se calcula que en Indonesia en 1965, después de que los militares tomaron el poder, fueron asesinadas más de cien mil personas, la mayoría de las cuales probablemente eran miembros de organizaciones comunistas.)

En mi artículo "Why Allende fell?" (*The World Today*, noviembre de 1973) sostengo que aun figuras tan respetadas como Frei comparten con Allende parte considerable de la responsabilidad en cuanto a la creación de una situación en la cual la dictadura parecía ser la única salida, aun cuando no hubiera sido planeada o siquiera buscada. En lo que se refiere a los grupos paramilitares, resulta evidente que su desarrollo se debió a la incapacidad inicial o falta de deseo del gobierno para frenarlos; posteriormente ofrecieron a los activistas de izquierda un escape para canalizar las frustraciones y los peligros físicos que les suponía una política pacífica; sin embargo sus afirmaciones retóricas en cuanto a que contaban con una capacidad ofensiva de importancia fueron siempre un autoengaño, que también pudiera haber engañado a otros, pero dudo mucho que hayan llegado a engañar alguna vez a los dirigentes en el gobierno.

¿POR QUÉ TAN RADICAL?

Si se acepta que el régimen de Allende trataba sinceramente de mantener la democracia en Chile, ¿por qué la Unidad Popular no consideró que moderando su programa podría salvaguardar los intereses de sus par-

tidarios? Antes de responder a esta pregunta es necesario recordar algunas de las desventajas que se derivaban de la atribución de poder político a través de una competencia electoral irrestricta en una sociedad en la que grupos sociales en conflicto consideraban que sus intereses esenciales dependían del resultado de cada contienda electoral. Tal sistema puede poner al descubierto los agravios entre grupos rivales y por lo tanto intensificar sus sentimientos de inseguridad y la necesidad de una cohesión de grupo; puede empujar a los intereses económicos a desplegar una actividad política al hacerles sentir que sus operaciones dependen de los vaivenes del favor político; y puede conducir a un clima febril de compromiso político ahí donde las expectativas de cambio del público son utópicas y por lo mismo el sentimiento de frustración política se ve exagerado.

Por lo menos en la historia chilena reciente el sistema electoral ha tendido a producir una polarización de las fuerzas políticas más que a reconciliar los intereses divergentes. Esto fue cierto no únicamente en 1970 sino también en periodos electorales anteriores cuando Allende postuló su candidatura. La intransigencia de las principales figuras del drama chileno tuvo su origen en cierta medida en la sensación de que estaban repitiendo la crisis nacional de 1891 cuando fue derrotado el presidente "progresista" Balmaceda, quien posteriormente se suicidó como resultado de la confrontación entre el Ejecutivo y un Congreso dominado por los conservadores, misma que degeneró en una breve guerra civil. (El abuelo de Allende, así como el de su leal comandante en jefe, el general Prats, fueron francomasones que lucharon juntos al lado del presidente Balmaceda; mientras que uno de los instigadores de la rebelión conservadora de 1891, el propietario del periódico más prestigioso de Chile, *El Mercurio*, era a su vez el abuelo del magnate de prensa que más que ningún otro orquestó las recientes campañas en contra de Allende). Sea cual sea la importancia de 1891, el patrón de las elecciones chilenas en el siglo xx subraya la tradición profundamente partidarista del país. Es evidente que al final de la confrontación izquierda-derecha de 1938 el sistema electoral generó un impresionante grado de tensión y un incipiente conflicto social, como lo ha demostrado un estudio reciente al respecto. Es impresionante el hecho de que el estudio en cuestión (que fue escrito antes de la elección presidencial de 1970) principie de la siguiente manera:

- * El actual Presidente es el Kerensky chileno.
- * Descarada intervención del Gobierno en el proceso electoral.
- * Deben terminar los privilegios de la oligarquía.
- * La derecha está vendida al imperialismo.

* La izquierda se deja atraer por el oro de Moscú.

Si a un chileno medio se le preguntara cuándo ha leído estas frases, probablemente contestaría: 1968, 1964. Otro de más edad y experiencia tal vez mencionaría 1920. Pero la realidad es que fueron dichas y escritas en 1938. (Marta Infante Barros, *Testigos del Treinta y Ocho*, Santiago, 1972, p. 9.)

Desde luego que en cada caso, pasada la crisis y después de la elección, se iniciaba la reconciliación (por lo menos hasta las siguientes elecciones) a nivel de liderazgo de los partidos, a pesar de la resistencia y de las desilusiones de los miembros de ambas partes. Por ejemplo, después de 1938 Allende criticó agriamente este proceso de compromiso postelectoral y denunció al Frente Popular como “la izquierda en política y la derecha en economía”, y una vez en el poder se propuso no incurrir en ese proceso de degeneración interna, odios partidistas y desmoralización de los miembros del partido. Es éste el significado de su insistencia en que él era el “Compañero Presidente” y no el Presidente de *todo* el pueblo, sino el Presidente de las masas desfavorecidas de la población.

Sin embargo, ésta no fue una decisión exclusiva de Allende. Reflejaba la polarización de las fuerzas sociales en el país como un todo después del relativo fracaso de los intentos reformistas de Frei. Era la única postura que permitiría a Allende mantener su coalición, y la alternativa no hubiera podido ser un cambio menor en el rumbo sino una ruptura fundamental con el ala izquierda de la coalición, así como con la base social sobre la cual descansaba. En este sentido, la heterogeneidad de la coalición restringió desde un primer momento la capacidad de maniobra de Allende. Dado que el MIR —por sí solo electoralmente insignificante pero que gozaba de una influencia considerable dentro del partido socialista y de la izquierda cristiana— se inclinaba a lanzar iniciativas independientes de las cuales la Unidad Popular, en vista de su precaria unidad y de una limitada base de poder, no podía disociarse ni tampoco reprimir, ni dirigir. Un rompimiento con el MIR hubiera hecho de Allende un prisionero de la democracia cristiana y le hubiera obligado a sancionar la represión de los grupos militantes de trabajadores y campesinos. Y a pesar de todo probablemente tampoco les hubiera dado suficiente seguridad a sus contrincantes, de manera que éstos permitieran la aplicación de un programa siquiera moderado de reformas. La UP no era una agrupación desconocida, capaz de ser todo para todos, como los estudiantes barbados cubanos que tomaron por sorpresa la Habana en 1959. Desde mucho antes de 1970 los opositores de Allende conocían su programa hasta el más mínimo detalle, así como sus ideas marxistas y sus jugadas tácticas. Mientras fue presidente las empresas privadas se

mostraron reticentes a invertir capital y entre poderosos elementos de la democracia cristiana existía el deseo de minar su base política, de la misma manera que Allende había minado desde 1964 su programa de reformas. Puede suponerse que la democracia cristiana hubiera podido, en una primera instancia y bajo determinadas condiciones, dar apoyo al gobierno en el Congreso (algunos líderes de la UP lamentan ahora retrospectivamente el sectarismo y el exceso de confianza que manifestaron a mediados de 1971), pero seguramente las condiciones se hubieran delineado de manera de debilitar la presidencia y frustrar la posibilidad de un aumento a largo plazo del tamaño o la militancia de la base popular de la izquierda. El proceso de polarización política limitaba tanto la capacidad de maniobra de los democristianos como de la UP; y para que los primeros pudieran mantener la unidad de su propio partido necesitaban de un liderazgo político decidido y de un ideal que los exaltara en la lucha. En lugar de eso se habían convertido en la burla de la izquierda y de la derecha que después de 1970 los llamaban los Kerenskys de Chile. (“A Frei... le preocupa convertirse, tal y como lo han expresado los brasileños, en el Kerensky de América Latina”. ITT “Memo on Chile”, 17 de septiembre de 1970, en *Subversion in Chile*, Londres 1972, p. 32.) Como reacción en defensa de sus propios intereses partidistas la mayoría de los líderes democristianos, de acuerdo con la profunda y arraigada tradición antimarxista del partido, recurrieron a una campaña bajo el lema de “salvar la democracia chilena del totalitarismo”. De esta manera, después de un primer desacuerdo, los líderes de la UP, conociendo la fuerza de esta reacción y empujados por una violenta hostilidad hacia el PDC que la historia había inspirado en muchos de sus partidarios, resolvió en 1971 no establecer ningún tipo de pacto con la democracia cristiana. Aun considerada retrospectivamente, la decisión de llevar todavía más lejos la polarización política “a partir exclusivamente” de la presidencia sin contar con la mayoría en el Congreso, podía verse como una consecuencia inevitable de la situación previa a las elecciones de 1970. En todo caso la UP decidió que existía una alternativa al compromiso, más marxista (punto que se analiza más detalladamente en la siguiente parte del trabajo) —esto es, una mayor presión a través de la movilización de trabajadores y campesinos, apartando así a las bases populares del PDC de su liderazgo reaccionario. Obviamente ello suponía un inmenso riesgo (en vista de la estrecha base social sobre la cual descansaría una movilización de trabajadores y campesinos (véase: Glosario, “Fuerza de trabajo”). Implicaba un juego en el que una serie de rápidas y acertadas reformas sociales consolidaría el poder de la UP de tal manera que adquiriera la seguridad suficiente para responder al ataque que, de acuerdo con los

marxistas chilenos, al final realizarían las clases más desfavorecidas. Una vez elegida esta opción radical, ¿de qué manera había proyectado defenderse el régimen frente a la resistencia que provocaría? ¿Por qué no preparó una defensa militar adecuada, puesto que tanto su análisis teórico como su experiencia práctica debieron haberle indicado que se presentaría la necesidad de tal defensa? En la siguiente parte del trabajo se analizan las razones que llevaron a la decisión estratégica de no reprimir a la derecha, y también se discute el cálculo erróneo en el análisis de la UP que la experiencia ha puesto de relieve. Considero que los principales dirigentes de la UP se sentían poco inclinados a optar por esa vía (en algunas ocasiones Allende habló de las consecuencias trágicas y de los efectos brutalizadores de una guerra civil o de un levantamiento revolucionario, aun cuando estuviera asegurado el triunfo de la izquierda) que no consideraban ni necesaria, ni siquiera posible. En un primer momento, Allende, el Partido Comunista y muchos líderes de la UP creyeron que cualquier acto extraconstitucional iniciado por el mismo gobierno sería un elemento en manos de sus enemigos y les enajenaría el apoyo del ejército. Por otra parte, al adoptar una postura defensiva esperaban que el cuerpo legalista de oficiales, los miembros moderados de la oposición parlamentaria, el aparato estatal y los elementos más tímidos de la pequeña burguesía tendrían la seguridad de que el gobierno protegería sus derechos. Únicamente la minoría propietaria aislada política y socialmente apoyaría la acción ilegal y directa, tal vez en connivencia con los intereses empresariales y gubernamentales norteamericanos y esa minoría egoísta perdería el apoyo de la opinión decente y moderada, siempre y cuando sus actos desesperados fueran sistemáticamente explicados y expuestos por un gobierno responsable y equilibrado. Esta posición de moderación logró frustrar la subversión derechista de octubre de 1970 (cuando radicales de derecha asesinaron al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas por su apego a la Constitución) y nuevamente, pero con mayores dificultades, la huelga patronal de octubre de 1972. En la práctica esta estrategia política fue la única defensa real de la UP, a todo lo largo de su periodo en el poder.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA "VÍA PACÍFICA"

En la práctica, la extrema derecha chilena, que durante 1971 aparentemente había sido vencida y aislada de manera definitiva, demostró ser capaz de movilizar un frente de oposición de tal manera masivo, unido, multifacético y fanático en contra del régimen socialmente radical aun-

que no represivo de la UP, que todas las defensas inteligentemente preparadas y elaboradas por el gobierno fueron arrolladas, al mismo tiempo que las conquistas sociales de las clases bajas han sido reprimidas o de plano eliminadas (no exclusivamente las de los últimos tres años o siquiera de la pasada década, sino reformas de medio siglo). En un período de apenas dos años se había logrado un virtual consenso entre los siguientes grupos clave: el cuerpo de oficiales, la prensa tradicional y las agencias de radiodifusión, las principales instituciones de profesionistas y comerciantes, la Suprema Corte y la mayoría del Congreso; el consenso incorporaba inclusive a grupos dirigentes de los movimientos obrero y campesino de gran importancia. El acuerdo se sustentaba en la idea de que era mejor arriesgar los peores excesos en la relación social antes que tolerar la persistencia, aun moderada, de una nueva relación de fuerzas políticas y económicas bajo el gobierno allendista. Independientemente de que su nueva actitud implicaba la traición a muchas convicciones enunciadas previamente, al tiempo que exigía un cierto grado de crueldad o más todavía de autoengaño que era más que ajeno a los estándares tradicionalmente aceptados por la mayor parte de las clases medias chilenas, la mayoría de los miembros de los grupos mencionados estaban dispuestos a ofrendar sus vidas en defensa de sus recién adquiridas convicciones. Incapaz de reprimir, ignorar o llegar a un compromiso con este centro masivo de la oposición interna, el régimen de Allende terminó por ser su víctima. En esta parte del escrito se examinan los aspectos del análisis político de la UP que demostraron ser erróneos.

La frase “análisis político de la UP” podría implicar un cuerpo definido y coherente de expectativas muy distintas al razonamiento que con frecuencia determina el comportamiento de un gobierno. La UP era una coalición de seis partidos políticos que abarcaba diversos intereses y posturas; aun antes de su elección Allende se había pronunciado en contra de un cambio en las alianzas, o de ignorar las opiniones de sus partidarios, aun cuando resultaran inconsistentes y hasta peligrosas. (Véase “Unidad Popular”.) Además es obvio que cada ministro percibía la situación de manera un tanto diferente, de acuerdo con sus propios problemas inmediatos, y los teóricos sociales que asesoraban al gobierno construyeron la Babel habitual de diagnósticos y remedios conflictivos. Algunos de los observadores políticos más experimentados simplemente se cubrieron la cara con las manos, convencidos desde el principio de que la empresa toda estaba desde sus inicios condenada al fracaso. Sin embargo, es posible identificar una serie de hipótesis operativas más o menos coherentes y consistentes que guiaron las decisiones generales del gobierno y que estaban calculadas para minimizar sus posibilidades de fra-

caso. A pesar de las reticencias que se puedan tener para atacar estas hipótesis ahora que sus autores están pagando con su propia vida los juicios que elaboraron después de concienzudas discusiones y estudios; a pesar de la tragedia de 1973 se puede argumentar que, dada la creencia de la UP de que en Chile era necesario un cambio social drástico y dada la situación política que heredó la coalición en 1970, las hipótesis operacionales de la UP eran bastante plausibles (aunque toda acción futura implica un alto riesgo). Pero resulta importante examinar con un máximo de ecuanimidad cuáles fueron los errores, dado que en ciertos aspectos demostraron ser inadecuadas y trágicas las consecuencias del fracaso.

Toca ahora examinar brevemente la validez de los presupuestos operacionales de la UP en cuanto a i) la situación internacional, ii) el equilibrio electoral y parlamentario, iii) el manejo de la economía, iv) el mantenimiento de la legitimidad gubernamental, en particular con respecto a la pequeña burguesía, v) la movilización defensiva de obreros y campesinos, vi) el problema de la lucha ideológica y de la libertad de prensa y, necesariamente, vii) la forma como pudo manejarse al ejército. En los seis encabezados referentes a factores internos la decisión más desastrosa, aunque tal vez inevitable fue la de rechazar el compromiso a pesar de la debilidad de la posición inicial. La UP y las instituciones chilenas eran lo suficientemente fuertes como para prolongar el conflicto hasta alcanzar un climax frenético de confrontación, pero en ningún caso tan fuerte como para obtener una victoria total o siquiera rescatar algo del desastre final.

i. *La situación internacional*

Mientras que Fidel Castro desorientó a la clase media cubana, mimó a los grupos más pobres del país y coqueteó con la asistencia soviética masiva, como consecuencia de una política osada y espectacular basada en un nacionalismo intensamente antinorteamericano, Salvador Allende, por su parte, adoptó una política de discreción (*low profile*) con respecto a Estados Unidos y cuidadosamente evitaba cualquier acción innecesaria que pudiera enajenarle la amistad de sus vecinos latinoamericanos más conservadores. La UP partía del supuesto de que en la arena internacional la moderación podría frustrar muchas amenazas potenciales al gobierno, ganarle algunos amigos útiles sin desilusionar al mismo tiempo (siempre y cuando fueran nacionalizadas las compañías cupríferas) a sus partidarios más militantes, que tendrían que contentarse con la admiración que despertaban en el exterior los importantes experimentos que se llevaban a cabo en el plano interno en Chile. Más todavía, gran parte de

la clase media chilena podía permanecer ajena a los ataques que la derecha lanzaba al gobierno si sentía que se gozaba de prestigio y aceptación en los países vecinos no comunistas. Actos específicos de interferencia como el caso de la ITT serían, por supuesto, denunciados públicamente para desacreditar a los enemigos externos del régimen, unificar a la opinión nacionalista y aislar a la pequeña minoría de chilenos identificada con el capital extranjero. Pero Allende estaba ansioso por salvar a Chile del éxodo de personal calificado, tal y como sucedió en Cuba en 1959, causando (según una advertencia de Fidel Castro) una disrupción económica de considerable importancia para la revolución; y se había propuesto no ofender al aparato militar chileno al no interferir en sus relaciones con el Pentágono. (De hecho, las ventas norteamericanas de armamento al ejército chileno se elevaron de \$3.2 millones en 1970 a \$13.5 millones en 1972, con un proyectado aumento de \$10 millones para 1974; no obstante, para poder tener una perspectiva en este punto estas cifras tendrían que compararse con las adquisiciones militares del país fuera de Estados Unidos. Antes de la caída de Allende se había planeado que se elevaran de un valor previsto de \$20 millones en 1972 a \$124 millones en 1974. Ver *Inter-American Economic Affairs*, invierno de 1973, pp. 72s.) Allende confiaba en su posición democrática, legalista y básicamente conciliadora en materia internacional para proteger a Chile de una agresión norteamericana abierta y mantener la lealtad de la opinión "nacionalista moderada" chilena; probablemente era ésta una política sensata. En última instancia la ITT, Kennecott, Pepsicola, la CIA y el Pentágono podrían haber contribuido para hacerlo caer, pero en la medida en que Allende conservara intacta la alianza social interna estas agencias corrían el riesgo de que de iniciar ellas mismas una intervención abierta ello repercutiría en favor de Allende más que en su perjuicio. Por otro lado, en vista de la autonomía de los militares, en caso de que degenerara la situación interna el recurso a un nacionalismo radical en materia internacional o a la ayuda económica soviética no serían un obstáculo para que las clases opositoras alcanzar su objetivo primordial. Por lo tanto, se puede concluir que siguiendo los consejos de su muy capaz e influyente secretario de Relaciones Exteriores, el socialista Clodomiro Almeyda, Allende actuó con gran inteligencia para minimizar las complicaciones internacionales que lo hubieran podido perjudicar, con la consecuencia de que el comportamiento explícitamente agresivo de los intereses extranjeros probablemente desempeñó apenas un papel secundario en la derrota del socialismo chileno. Desde luego que también hubo un intento por estrangular económicamente a la UP a través de los créditos que otorgan las agencias financieras internacionales dominadas por Estados Unidos y del intento

de la Kennecott de interceptar por la vía legal los envíos de cobre chileno a Europa. Indudablemente estas fórmulas de obstaculización, técnicamente "legítimas", contribuyeron a las dificultades económicas que enfrentó la UP y por lo tanto a su derrota. Por otra parte, Allende logró ahorrar una cantidad considerable de divisas al bloquear las remesas de utilidades; logró (con cierta simpatía de los acreedores en Europa occidental) refinanciar una parte importante del servicio de la deuda externa heredada; y también obtuvo crédito comercial de importancia (aunque a corto plazo y a una elevada tasa de interés). Por lo tanto, la crisis económica del Chile socialista no se puede atribuir a un bloqueo invisible. (Ver: "Bloqueo invisible".) Probablemente fue más importante en términos comerciales la simple mala suerte, para no mencionar los efectos de la política económica interna que consideramos más adelante.

Por último, hay que reconocer que aunque los enemigos externos de la UP hubieran podido mantener una política de mayor discreción que la que fue posible en el caso de Cuba, ello se debió en gran parte a que la oposición interna tenía mucho más prestigio, coherencia y confianza en sí misma que los enemigos de Castro (sobre todo Batista y sus compinches). La UP pudo demostrar que gran parte de la oposición dependía económica, cultural y organizativamente de Estados Unidos, pero la mera denuncia de estos lazos no bastaba para desacreditar o dividir a sus oponentes, dado que era necesario un problema que pusiera de manifiesto la falta de patriotismo de los antimarxistas; la relativa ausencia de tensión internacional (del tipo que hubiera podido ser provocada por los enemigos de la UP) fue una gran desventaja. (A este nivel el contraste entre Chile y Cuba se examina en el Glosario bajo el título "Antimperialismo".) Para eliminar cualquier cuestión de ese tipo, aun el partido Nacional, de derecha, votó en el Congreso en 1971 la nacionalización del cobre (si su actuación hubiera sido otra, Allende hubiera podido aprovechar la oportunidad para recurrir a un plebiscito en el cual el sentimiento nacionalista hubiera favorecido al gobierno) y a partir de ese momento la oposición pudo neutralizar progresivamente los ataques de la UP en cuanto a su falta de patriotismo, logrando por último virar gran parte de la fuerza del sentimiento nacionalista en contra del mismo gobierno. (La campaña de la oposición sostenía que chilenos leales con genuinas causas de descontento eran difamados como peleles extranjeros, mientras que marxistas extranjeros, algunas veces armados, eran favorecidos por el aparato estatal. Estas acusaciones dieron lugar a un aumento en la xenofobia y provocaron un resentimiento perjudicial, en particular en los círculos militares, que deploraban profundamente el que ciudadanos argentinos ocuparan puestos clave en el aparato estatal.) En este punto conside-

raciones de carácter internacional tuvieron su efecto sobre la política interna.

ii. *La política de los partidos*

Ya ha sido explicada la decisión de la UP de no formar una amplia (aunque limitada) alianza reformista con la Democracia Cristiana. La agria rivalidad entre los demócrta-cristianos y los marxistas y la resultante polarización y politización de la vida pública chilena fue un proceso que tenía sus raíces en el pasado, de tal manera que en 1970 había pocas posibilidades de cooperación con base en términos mutuamente aceptables. En lugar de eso, el gobierno intentó atraer a los obreros y campesinos del partido de la oposición, poniendo en evidencia a los líderes de la Democracia Cristiana como opositores de la reforma social. Esta estrategia no fue del todo un fracaso. Los resultados de las elecciones de 1969 habían distribuido las 150 diputaciones de la siguiente manera: Nacional, 34; PDC, 55; Radicales, 24; Comunistas, 22; Socialistas, 15. De manera que en la Cámara de Diputados los tres últimos partidos (todos ellos pertenecientes a la UP) contaban con 61 puestos y en el Senado los partidarios de Allende ocupaban 21 de las 50 curules. En 1971 el gobierno convenció a algunos democristianos progresistas y obtuvo por lo tanto el apoyo temporal de casi 90 de los 200 representantes en el Congreso. En consecuencia, es posible que una cuarta parte del electorado democristiano de 1970 haya sido ganado por la UP para las elecciones parlamentarias de 1973, y que en los últimos meses del régimen de Allende el temor al "fascismo" haya afectado a muchos de los obreros organizados que hasta entonces habían permanecido leales a la Democracia Cristiana, pero que estaban cada vez más desilusionados con su liderazgo a medida que tomaban conciencia de la posibilidad de un asalto militar a los suburbios industriales. Por razones similares algunos personajes prominentes rompieron, en la última etapa de la crisis, con el liderazgo de su partido cuando éste ya estaba muy próximo a instigar abiertamente un golpe militar. Pero en el balance final las ganancias de la UP a expensas de la Democracia Cristiana fueron demasiado reducidas, invariablemente tardías y el costo del enfoque dado a la política de partidos demostró haber superado desproporcionadamente los beneficios. Algunas de las ganancias del gobierno a costa de los democristianos se originaron a partir de la defección de muchos votantes radicales y de la fragmentación del partido en el Congreso. Muchos de los centristas tradicionales se sintieron incapaces de unirse a la política gubernamental de intensificación de la polarización y del conflicto de clases. De los

89 parlamentarios que a fines de 1971 apoyaban a la UP, 33 eran radicales, de los cuales 22 pasaron a la oposición durante 1972, dejando al gobierno con un frágil tercio. (Como resultado de las elecciones parlamentarias de 1973 la proporción radical cayó a 13, de los cuales siete apoyaban al gobierno y 6 se oponían a él. En ese momento Allende contaba con un total de 83 parlamentarios —35 socialistas, 34 comunistas, 7 radicales y siete más; mientras que 117 pertenecían a la oposición—, 69 PDC, 42 Nacionales y 6 Radicales.). Probablemente los virajes psicológicos fueron más importantes que los ocurridos dentro del Congreso. El núcleo de los demócrata-cristianos leales que resistieron la propaganda de la UP respondió con una hostilidad todavía más agudizada cuando sus líderes lucharon por conservar la adhesión de los partidarios inconsistentes. A mediados de 1973 ningún argumento de la UP, sin importar qué tan razonable, bien documentado o urgente fuera, podía tener impacto alguno sobre las filas estrechamente cerradas de la oposición democristiana. Más todavía, las tácticas de la UP lograron llevar al grueso de los demócrata-cristianos a una dependencia incondicional con respecto a sus antiguos enemigos de la derecha tradicional. Pero la estrategia de la UP no logró producir una mayoría que apoyara al gobierno en el Congreso, aunque fuera éste un prerequisite esencial para la estabilidad a largo plazo de una “vía chilena” pacífica. El resultado más importante de estas tácticas fue, por lo tanto, minimizar las oportunidades de que los marxistas y los democristianos actuaran conjuntamente en algunas de las instituciones vitales para la vida pública chilena —el Parlamento, los sindicatos, las universidades, etc. Los intentos de la UP de dividir a la oposición desde abajo minaron fatalmente la credibilidad de estas instituciones; y sin embargo eran ellas mismas la principal defensa de la UP en contra de una reacción extremista.

No obstante, para entender los reacomodos partidistas es necesario ir más allá de la política electoral formal, en vista de que el obstáculo que impedía cualquier reconciliación o *modus vivendi* entre la UP y la Democracia Cristiana residía no en las estrategias rivales para el reclutamiento de los partidos, sino en sus posiciones diametralmente opuestas en lo que se refiere a cómo y quién debía dirigir la economía.

iii. La economía

El conflicto de clases y de partidos que resultó de los intentos de Allende de llevar a cabo su programa y de ampliar la base de su gobierno pudo haber sido por sí mismo suficiente para destruir el sistema

constitucional. Nunca lo sabremos. Lo que sí es evidente es que la crisis de su programa económico fue inmensamente agravada por todas las tensiones institucionales anteriores. El objetivo inicial del gobierno era consolidar una base electoral y popular suficiente para tomar en sus manos las "posiciones dirigentes" de la economía. Se creía que únicamente a través de un programa acelerado en los primeros meses se podría acumular una fuerza suficiente para conquistar el respeto (o por lo menos la aceptación, de esa oposición. De esta manera, con un mayor control del Ejecutivo sobre la economía, que se obtendría a través de una extensa nacionalización, se esperaba recuperar gran parte del excedente invertible de la nación, mismo que se reasignaría para obtener una estructura productiva que generara más empleo y tuviera una mayor capacidad para satisfacer las necesidades. No obstante, después del primer año de gobierno estas ambiciosas esperanzas empezaron a desvanecerse, y cuando la oposición respondió violentamente a los intentos de la UP de independizar al Ejecutivo, el gobierno se vio obligado a mantenerse en una posición tan defensiva que no le permitió alcanzar un cuerpo coherente de objetivos.

Uno por uno fueron fracasando los instrumentos de control del Ejecutivo sobre la economía, y en la lucha por la sobrevivencia política el régimen tuvo que sacrificar cualquier otra consideración en aras del mantenimiento del pleno empleo (vital para la protección de su base sindical), que fue complementado con otros intentos menos efectivos por conservar la redistribución del ingreso que se había logrado en los primeros meses (vital para proteger la cohesión de la coalición y de su base electoral). (Ver: "Desempleo.")

La controversia más importante se refería al "Área de Propiedad Social" (APS), cuyo status legal nunca había quedado definido, puesto que el Presidente no pudo llegar a un acuerdo con el Congreso en cuanto al procedimiento que regiría la nacionalización. El gobierno esperaba en un primer momento que la coordinación de la política económica estatal y de un sector público ampliado proporcionaría todos los controles necesarios para el funcionamiento de una economía centralmente planificada, siempre y cuando esas "posiciones dirigentes" pasaran al sector público; y si prometía detener las expropiaciones podría dar confianza al resto del sector empresarial privado (que consistía primordialmente de una multiplicidad de firmas medianas y pequeñas en términos generales con un capital limitado y con oportunidades bastante menores de beneficio). El gobierno también consideraba que el APS era vital para su propia sobrevivencia dado que, si la mayoría opositora en el Congreso se negaba a aprobar un aumento impositivo para financiar los planes de reforma

social del Ejecutivo, se esperaba que la manipulación de los precios en el sector público y de la tasa de cambio generarían los recursos necesarios sin necesidad de la aprobación legislativa.

Fueron varias las razones del fracaso de esta estrategia. En primer lugar, el legado del gobierno anterior incluía ciertos rasgos positivos (cuantiosas reservas de divisas extranjeras, un margen de capacidad ociosa, un sistema impositivo relativamente eficiente, un sector público de sustancial importancia y una administración experimentada capaz de aplicar reformas estructurales), pero también abrigaba peligros encubiertos. En 1969 una rebelión militar por motivos salariales tuvo como consecuencia la duplicación del presupuesto militar, una concesión que por sí sola absorbía las tres cuartas partes del incremento del ingreso del sector público en 1970, lo cual dejaba recursos muy escasos para cualquier inversión pública. De hecho, en un intento por detener la inflación en el año de las elecciones, en 1970, los precios en el sector público se elevaron únicamente en un 28% aunque la tasa de aumento en el mercado libre fue un 10% mayor. De manera que al tomar posesión Allende se enfrentaba ya a una inflación parcialmente reprimida, a un sector público que generaba un reducido excedente para la inversión y a una tasa de cambio sobrevaluada casi en un 25 por ciento a pesar de las frecuentes pequeñas devaluaciones. El programa de acción inmediata de cuarenta puntos de la UP incluía 30) control de precios, 31) alto a las "escandalosas devaluaciones", 35) y 36) pleno empleo. En la práctica esto significaba aumentar la presión de la demanda, tanto para los bienes producidos internamente como para las importaciones, en un contexto en el que la inflación ya estaba siendo artificialmente reprimida. En lugar de permitir (como lo aconsejaron algunos economistas) que las presiones sobre los costos se canalizaran a través del sistema de precios (lo cual probablemente hubiera significado una inflación "controlada" de cerca del 50 por ciento durante el difícil primer año en el poder), desde un primer momento la UP confió en los controles administrativos. Así fue como se logró un primer crecimiento a expensas de las reservas, los excedentes y la inversión pública. En lo que se refiere al sector privado, aunque había perdido muchas de las empresas clave, en particular los bancos, todavía representaba las tres quintas partes del total de la producción empresarial, y desde el principio redujo su inversión neta virtualmente a cero. Por lo tanto, en la práctica la estrategia del gobierno se tuvo que enfrentar desde un primer momento a una huelga de inversiones, misma que trató de contrarrestar estimulando el empleo y una expansión en el consumo. Este último fue financiado agotando los excedentes y las reservas monetarias, así como la mayor parte de las utilidades de las em-

presas. El ya anémico sector público empezó a generar amplios déficits, y a medida que su tamaño aumentó a raíz de las nacionalizaciones de 1971, la escala de su desahorro se convirtió en fuente importante de inflación y de una asignación errónea de los recursos. En lugar de “capturar el excedente” para propósitos de la construcción del socialismo, “las posiciones dirigentes” estaban generando un déficit que debilitaría la capacidad, no únicamente de mando de la UP, sino de sobrevivencia. Para diciembre de 1971 el entusiasmo inicial del gobierno por la creación de dinero, distribuido en forma de nuevos créditos (vía los bancos nacionalizados), costosos aumentos salariales y generosos gastos sociales, había producido un aumento del 120 por ciento de la oferta monetaria, comparado con apenas un 20 por ciento de aumento en el índice oficial de precios. Tal cantidad de liquidez habría de amenazar el control de precios, aun en un régimen más sólidamente establecido o con una mayor capacidad de importación, en vista de la escasez en el mercado interno. Los recursos de Allende para restringir la inflación disminuyeron con las reservas de divisas (exhaustas a fines de 1971) y con el deseo cada vez menor del sector privado de someterse a un gobierno cuyo ímpetu empezaba a decaer. Así, a partir de junio de 1972, un nuevo ministro de Economía trató, aunque tardíamente, de volver a una política de precios más realista; la inflación dejó de ser simulada, el índice de precios del consumidor se elevó sustancialmente (ver: “Inflación”) y el conflicto político adquirió nueva virulencia.

¿Habría una alternativa realista a esta política económica que le hubiera permitido a la UP minimizar el perjuicio político que le causó la inflación, sin que por que ello traicionara sus objetivos socialistas? Esta pregunta hipotética sólo puede ser respondida de manera especulativa. En todo caso debe señalarse que hacia finales de 1970, cuando la UP estaba elaborando sus decisiones económicas, recibió la asesoría realista de un número importante de expertos simpatizantes. El debate en torno a la estrategia económica fue completo y variado, aunque hubo desde luego una resistencia política considerable a retirar cualquiera de las promesas contenidas en el programa de los cuarenta puntos. (En *Panorama Económico* de enero de 1971 se encuentra una buena muestra de esta controversia.) La principal alternativa sugerida consistía en que en el primer año de gobierno no se diera tanta importancia a la inflación (algunos consideraban que un aumento de precios del 40 por ciento en ese año, en lugar del 20 por ciento que se alcanzó, no afectaría de manera significativa la popularidad del régimen) y proponían en cambio centrar la atención en el mantenimiento del excedente invertible del país. De acuerdo con este punto de vista, en ese lapso no habría necesidad de

disminuir el ritmo de la reforma social, puesto que se trataba de medidas populares entre el electorado; pero si la Unidad Popular no fomentaba mucho la expansión del consumo y fuera adelante con el sistema de devaluaciones dosificadas, le sería posible obtener una situación de balanza de pagos más favorable en 1972 y con ello podría ejercer un mayor control sobre la economía a través de la inversión pública y tener mayores oportunidades para frenar la tasa de inflación a largo plazo. Ahora ya no se puede probar la viabilidad de esta alternativa, pero se pueden imaginar las siguientes consecuencias. Se habría adelantado un año la resistencia de la pequeña burguesía que se agudizó en 1972; en el seno de la misma UP habría habido recriminaciones entre quienes relacionaban el excedente invertible con la tasa de inflación y quienes consideraban inmoral cualquier acto de confianza en el mecanismo de precios del mercado. Por lo tanto, es posible que la UP no habría obtenido tan buenos resultados en las elecciones locales de 1971 (aunque tampoco quedó muy claro qué fue lo que le ganó nuevos votos si sus dádivas o el pleno empleo y las reformas sociales), pero hubiera conservado una mayor libertad de iniciativa en 1972, y tal vez posteriormente no habría tenido que enfrentarse a una oposición tan frenética. Retrospectivamente quiero suponer que esta alternativa hubiera sido más adecuada, pero tampoco suficiente para evitar la debacle.

Lo que de hecho sucedió cuando el control de precios se derrumbó a mediados de 1972, fue que a los ricos, que siempre se habían opuesto al gobierno, se unieron muchos empleados independientes (especialmente en el sector de distribución) cuyos magros ingresos se vieron amenazados por la creciente escasez de divisas. En particular sus mujeres (un sector tradicionalmente reactivo al llamado de los partidos marxistas) reaccionaron emocionalmente a las colas, la escasez y las tensiones políticas, y exigieron a sus hombres que resistieran con mayor intransigencia. En estas circunstancias la "oposición burguesa" demostró en octubre de 1972 ser más numerosa, tenaz e intratable de lo que los teóricos del régimen habían previsto.

iv. La "pequeña burguesía"

A nivel teórico, los marxistas chilenos sabían que el principal obstáculo a la transformación socialista de su sociedad (basada en una estructura económica "semicolonial") era un pequeño núcleo de banqueros, monopolistas y grandes terratenientes cuyos intereses estaban casi en su totalidad interrelacionados con el capitalismo internacional. Numerosos estudios de la estructura social chilena confirman diferentes aspectos de

este modelo —por ejemplo, la familia Edwards, propietaria del principal periódico chileno, tenía también una importante participación en la banca privada y financiaba al partido Nacional, de derecha. La fortuna de la familia había sido iniciada por el bisabuelo, Agustín Edwards Ossandón, un comerciante de minerales de la década de los cuarenta del siglo xix, quien fundó en 1856 el poderoso Banco Edwards y que ya para 1870 se había convertido en un importante terrateniente. Su hijo adquirió el más importante periódico de Chile, *El Mercurio*, en la década de 1880 (como ya se ha mencionado), desempeñó un papel muy activo del lado conservador en la guerra civil de 1891 y posteriormente fue nombrado ministro. Su hijo, por su parte, adquirió en la década de 1920 la propiedad por lo menos de cuatro periódicos. En 1955 se supo que la familia Edwards poseía 61 compañías limitadas con un valor combinado que se estimó en un 21 por ciento del valor total de las compañías cotizadas en el mercado de valores chileno. En 1969 Agustín Edwards Eastman era dueño de diez periódicos y de cinco estaciones de radio (ver: Mattelart y Castillo, *La ideología de la dominación en una sociedad dependiente*, Buenos Aires, pp. 107-111. En la página 109 aparecen enumeradas las 61 firmas.) Después de la victoria de Allende se trasladó a Nueva York, donde actualmente ocupa la vicepresidencia de la Pepsicola. Este análisis ha sido reforzado por muchos otros estudios sobre la concentración de la propiedad, los consejos interrelacionados, el capital financiero y las inversiones extranjeras estratégicas, así como sobre la difusión de noticias y de valores “proimperialistas” a través de los medios de comunicación de masas. La consecuente implicación política era que la “gran burguesía proimperialista” debía ser aislada de la amplia masa de pequeños propietarios, profesionistas, burócratas y artesanos (para cifras ver: “Fuerza de trabajo”). Si se lograba esa separación, entonces los monopolistas, los banqueros y los latifundistas, así como sus recursos de organización, podían ser captados y utilizados por el Estado socialista para consolidar un orden social totalmente diferente. Aunque no todos los políticos de la UP eran en la práctica tan optimistas, su teoría sugería, sin embargo, que una vez que los principales centros de organización capitalista fueran nacionalizados y que trabajaran en armonía con los principales centros de organización de la clase trabajadora (o sea, los sindicatos, la prensa de izquierda, los comités de distribución de alimentos, etc.), sería relativamente más fácil tratar con el remanente de los intereses propietarios. En su primer año la UP expropió, recurriendo a legislación ya existente, el sistema bancario, el comercio exterior, las fábricas y los intereses de los terratenientes más importantes. Ninguno de ellos era capaz de conquistar un apoyo electoral suficiente para frustrar la expro-

piación o minar el sistema electoral. Vencida su resistencia se esperaba que las amplias capas restantes de la clase media y de la pequeña burguesía permanecerían relativamente sin dirección y vulnerables a cualquier manipulación o división de los principales centros de poder de la sociedad. Por las razones que ya se han mencionado, habría sido imposible utilizar la coerción estatal en su contra pero un análisis marxista sugería que estas capas sociales serían más susceptibles a un manejo político hábil que la gran burguesía, cuyas bases de poder y de propiedad tendrían necesariamente que ser eliminadas por cualquier régimen socialista.

Con lo anterior terminamos lo que se refiere a la teoría inicial. Pero una vez que la UP hubiera emprendido acciones en contra de los capitalistas monopólicos se planteaba el problema de cómo enfrentarse a la oposición "pequeño burguesa", así como de qué esperar o temer de ella. A este respecto las diferencias de opinión entre los teóricos simpatizantes del gobierno eran mayores. Planteado directamente, el problema era el siguiente: ¿había que seducir o que subyugar a las "clases medias"? Puesto de otra manera, ¿podía confiarse en que respetarían al gobierno legal (en cuyo caso sería todavía necesaria una campaña contra las minorías sediciosas entre ellas)? ¿O deberían ser consideradas como comprometidas en la explotación de los pobres? —en cuyo caso la única esperanza del régimen sería movilizar a los habitantes de los cinturones de miseria, a las amas de casa de los barrios miserables y a los campesinos pobres, hasta vencer a nivel local la resistencia de los comerciantes, los empleados menores, los campesinos ricos, etc.

La respuesta del Partido Comunista era obvia: la UP era una alianza popular (o sea que incluía a la pequeña burguesía) en contra del imperialismo y de su aliado local el gran capital. Los radicales y la mitad del Partido Socialista de Allende apoyaban esta línea. En la práctica ello significó que no se podía fomentar la hostilidad de la Iglesia, que los créditos estatales se debían extender a las firmas pequeñas, que había que darles la seguridad de que no serían expropiadas, debía demostrárseles a los comerciantes de las áreas pobres que el pleno empleo y la redistribución representaban para ellos más comercio (aunque en esto último el Partido Comunista se inclinaba a obligarlos, mientras que la mayoría de la UP prefería ignorarlos y basarse en las ventas al por mayor). En términos generales la mejor defensa contra la reacción era reunir una amplia mayoría (virtualmente desarmada) de la población en torno a lemas tales como "no a la guerra civil, no al fascismo". No obstante, una minoría activa de la izquierda, formada por el MIR, importantes elementos del partido socialista y otras varias fracciones pequeñas de la UP, recha-

zaban implícitamente esta fórmula, insistiendo en cambio en la necesidad de organizar la invasión de tierras por parte de los campesinos, aun en contra de los pequeños propietarios; en denunciar el acaparamiento de alimentos, aun de los pequeños comerciantes; en extender la movilización popular, aun entre los trabajadores dispersos y mal remunerados en el renglón del artesanado y entre los trabajadores eventuales de las *poblaciones*; exigían también desafiar a los tribunales y a la burocracia estatal cuando éstos se convirtieran en un obstáculo para el proceso de la movilización revolucionaria; hablaban de formar milicias izquierdistas; y, a partir de mediados de 1973, incitaban a los conscriptos y a los oficiales sin comisión a desobedecer las órdenes contrarrevolucionarias de los superiores.

Sin duda alguna, detrás de estas disensiones en materia de estrategia había la tendencia a beneficiar a un determinado partido dentro de la coalición de la UP, así como un conflicto ideológico. En la práctica, la mayoría del gobierno siguió los lineamientos comunistas; pero la acción de las organizaciones con ideas ultraizquierdistas también era muy amplia a nivel local, así como la incertidumbre que las implicaciones de la política gubernamental inspiraban a los pequeños industriales, a los comerciantes locales y a los agricultores que poseían menos de 80 hectáreas de tierra irrigada. De esta manera, les fue muy fácil a los medios de comunicación de masas en manos de la derecha convencer casi a toda la "pequeña burguesía" de que su seguridad estaba amenazada. Más todavía, una vez que la tasa de inflación se escapó de control, una tremenda inseguridad se apoderó hasta de los pequeños propietarios que más apoyaban al gobierno. Además, asociaciones laborales importantes y disciplinadas —cuyo liderazgo se encontraba generalmente en manos de personajes de tiempo atrás conocidos y con frecuencia desesperados por presentar cualquier decisión gubernamental a la luz más desfavorable— ejercían poderosas presiones sobre ellos para que se unieran a la oposición. Por lo tanto, en su último año de gobierno la UP tuvo que enfrentarse a un sólido muro bien organizado de organizaciones de la clase media y de la pequeña burguesía, los gremios, que no se detendría ante nada para provocar un cambio de régimen y que en una medida considerable había desplazado a los partidos tradicionales de oposición como el principal instrumento de resistencia al gobierno.

v. La movilización del apoyo a la UP

De todo lo anterior podría concluirse que la mayoría de la UP estaba de tal manera absorbida por la desesperada labor de dar confianza a la

pequeña burguesía que descuidó otra labor más fundamental, es decir, la consolidación y educación de su propia base esencial de apoyo. Estas críticas ya han sido ampliamente expuestas, pero de hecho parece más factible que la UP haya llevado el proceso de reclutamiento político y de educación de sus bases "naturales" de apoyo tan lejos como le fue posible. La subsecuente incapacidad del gobierno para movilizar a sus seguidores para una lucha armada de importancia no debe llevarnos a subestimar el grado de reclutamiento de apoyo organizado emprendido en las regiones mineras, el campo, las fábricas o las *poblaciones* (ver: *CUT Pobladores y movilización Popular*). De los 291 400 miembros de los *sindicatos obreros* manuales que votaron en las elecciones del CUT de junio de 1972, más del 80 por ciento apoyó a los candidatos de la UP y únicamente el 17 por ciento votó por la oposición "democrática".

Obviamente la calidad de la organización variaba de lugar a lugar de acuerdo con los factores locales y con las características del liderazgo de la zona. Es probable que una buena dosis de energía se haya invertido en la lucha en el seno de la izquierda misma, y que en algunas áreas se perdieran simpatizantes potenciales debido a la torpeza del liderazgo local, que en ocasiones llegaba a recurrir a tácticas semigangsteriles. Por otra parte, con frecuencia los esfuerzos de movilización de la izquierda estaban en desventaja frente a la naturaleza cerrada y severa del liderazgo de los *gremios*, dada la necesidad que tenían de recurrir a un largo proceso de persuasión y de toma de decisiones democrática entre sus miembros. Durante mucho tiempo también se arguyó que la UP confió demasiado en organizar una base de apoyo desde el aparato estatal y que por lo tanto cultivaba en muchos de sus nuevos reclutas una especie de actitud deferente y dependiente. Ésta era la crítica del MIR, cuyos esfuerzos de organización eran a su vez considerados "provocativos" y contraproducentes, especialmente en los casos en los que la invasión de tierras producía resultados electorales desfavorables o cuando parecía contribuir a una disrupción de la producción.

No obstante, a partir de octubre de 1972 (sobre todo con el surgimiento de una resistencia militante por parte de las clases medias) pareció que las organizaciones de masa de la UP respondían con un grado más elevado de disciplina, de coherencia y de conciencia política. Los teóricos gobiernistas siempre habían mantenido que únicamente a través de un largo proceso de lucha revolucionaria, y no a través de los planes de organización que el liderazgo nacional diseñaba en el papel, podría establecerse una base masiva real y sólida. Pero gran parte del ímpetu emocional pudo haberse originado más en el temor a la amenaza evidente que representaba el "fascismo", que en un optimismo revolucionario.

Cualquiera que sea la causa, existe una cantidad impresionante de evidencia que demuestra la escala y solidez de la base popular de la UP, ya sea en las manifestaciones masivas de apoyo al gobierno, en las campañas de trabajo voluntario y —especialmente después de la huelga patronal— en la proliferación de las agencias que bajo dirección marxista distribuían alimentos y controlaban los precios, en las organizaciones comunitarias en los lugares de trabajo en las zonas fabriles, en las huelgas y en los paros en desafío a la oposición, o en los resultados electorales de marzo de 1973. (Después de todo la UP obtuvo en esa fecha el 44 por ciento del voto, comparable con el 37 por ciento que el siguiente año obtuvieron los laboristas en Inglaterra.) De hecho la prueba más concluyente de los logros organizativos de la UP entre sus propios seguidores la constituye la actual junta militar que, con la ferocidad y el alcance de sus métodos represivos, ha demostrado la fuerza política del movimiento al que se opone.

Sin embargo, desde un punto de vista marxista la experiencia de movilización de masas de la UP sugiere algunas limitaciones en cuanto al potencial político aun de la fracción asalariada de la fuerza laboral. En pocas palabras, sólo una pequeña proporción de la fuerza laboral estaba empleada en grandes empresas. En 1960 había 70 000 empresas que empleaban cinco o menos obreros, o sea la mitad de la fuerza de trabajo industrial chilena. En el sector manufacturero, sólo 190 empresas empleaban cada una 200 o más obreros. (Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile*, Londres 1972, p. 69.) Aun en el caso de empresas más grandes, los obreros no estaban necesariamente muy politizados como lo demuestran, por ejemplo, las entrevistas de James Petras (ver: Estudios en *International Comparative Development*, primavera de 1973, vol. VIII, no. 1). De manera que para adquirir una base política masiva era necesario rebasar los límites de estos bastiones organizativos (sobre todo en las fábricas textiles de Santiago y en las minas de carbón de la provincia de Concepción). Así pues, el gobierno obtuvo poco apoyo (si no en “calidad” por lo menos en cantidad) a partir del aumento autónomo de la conciencia de clase provocado por la experiencia del conflicto social en el lugar de trabajo. Ese apoyo fue más que nada producto del trabajo de propaganda y de organización que se realizaba entre los muchos individuos marginales e inseguros cuyos “intereses objetivos” puede que únicamente hayan consistido en un pedazo de tierra, en una choza mejor construida, en alimentos seguros, en un mayor respeto por parte de sus superiores de clase, más que en objetivos concientes de clase tales como el control de los obreros, o metas intelectuales como la igualdad socialista. El apoyo político de la mayoría de ellos parece haber estado

determinado más bien por factores de localización que de clasificación ocupacional. Por ejemplo, los asalariados que vivían o trabajaban en una zona mayoritariamente gobiernista estaban sujetos a intensas presiones sociales para asimilarse y lo mismo en el caso de muchos obreros que se sentían inseguros y que habitaban vecindarios favorables a la oposición. A este respecto, el proceso de movilización en Chile mostró algunos síntomas que indicaban un agrupamiento geográfico reminiscente del que ha impuesto la intensa lucha política entre los liberales y los conservadores en Colombia, o los conflictos más amplios entre católicos y protestantes en Ulster. Esta base de apoyo político, en parte más local que estrictamente ocupacional, parece haber constituido una grave desventaja para la izquierda en muchas áreas rurales, donde un análisis ocupacional sugeriría tal vez que los campesinos pobres debían estar organizados en contra de los comerciantes, los camioneros y los "kulaks" que probablemente se estaban beneficiando del mercado negro, pero donde las costumbres locales normalmente daban a los miembros más acomodados de la comunidad una ventaja decisiva en la determinación de la alineación política del vecindario. Los esfuerzos organizativos de la UP se enfrentaban a otro obstáculo de considerable importancia. Muy pocas mujeres chilenas han sido incorporadas a la fuerza laboral; su principal función social consiste en mantener la unidad familiar, en particular a través del aprovisionamiento y la preparación de la comida. Las colas, la escasez de alimentos, las huelgas, las manifestaciones políticas, los enfrentamientos violentos y las expropiaciones aparentemente ilegales se había convertido en una amenaza para la familia chilena —no sólo la de clase media sino también para muchas familias pobres "respetables". En algunas circunstancias, como por ejemplo en las minas de carbón, las esposas de los partidarios del gobierno pudieron haber contribuido a una intensificación del compromiso político de sus maridos pero, en términos generales, las mujeres de Chile se oponían al gobierno mucho más que los hombres y desempeñaron un papel importante al contrarrestar los esfuerzos de movilización de los marxistas y fortalecer la unidad y militancia de la oposición.

En conclusión, es indudable que la UP enfrentó muchas dificultades en sus esfuerzos de movilización, mismas que intensificaron el reclutamiento tanto en los movimientos de oposición como en la misma coalición. Evidentemente existía un importante desequilibrio en la calidad del apoyo al gobierno; incluía, además del núcleo de activistas políticamente comprometidos (representados por los 150 000 miembros adultos, más 100 000 jóvenes, que afirmaba tener el Partido Comunista en 1973) un elemento considerable de oportunistas y dependientes. Es cierto que

la labor de transformación de esta base electoral masiva en una fuerza armada capaz de defender militarmente al régimen estuvo lejos de lograrse (o siquiera, con algunas excepciones, de intentarse). Pero las limitaciones de tamaño y calidad del apoyo popular de la UP no deben atribuirse esencialmente a la inadecuación de sus esfuerzos por organizarse, sino más bien al contexto dentro del cual operaba. La movilización de apoyo en un sistema democrático, sin el control sobre los medios de represión o sobre los medios de comunicación de masas, conlleva también la libertad de los enemigos de clase para movilizarse (una libertad que hasta ahora muy pocos movimientos marxistas han estado dispuestos a conceder). Al menos en un país como Chile, la estructura social impone obstáculos serios a la amplitud del “electorado natural” del movimiento marxista, fuera del cual sería imposible actuar de manera radical sin haber previamente conquistado todo el poder del Estado.

vi. *La “lucha ideológica”*

La izquierda creyó que contaba con una importante ventaja adicional en la lucha por la movilización y la politización de la masa de la población. Sus miembros creían disponer de una clara teoría de lo que estaban haciendo y de hacia dónde iban —un cuerpo de doctrina social y un número elevado de científicos sociales y de periodistas educados que eran capaces de desarrollar, investigar y propagar sus ideas. La ideología tradicional que había sustentado el antiguo monopolio de la clase capitalista había sido en buena medida desacreditada o minada, no tanto por los marxistas, como por los mismos democristianos reformistas. Y sin embargo, tal y como lo veía la UP, las ideas de la Democracia Cristiana no eran un sustituto, puesto que, salvo por lo que habían tomado de la propia izquierda, todo lo que proponían no pasaba de ser una mezcla confusa e irreal de lemas que según algunos respondía al carácter oportunista y multiclasista del partido. Las ideas más claras de los demócrata cristianos eran negativas —el rechazo de las jerarquías capitalistas tradicionales y de la alternativa marxista.

El único punto positivo más claramente discernible entre sus vagos pronunciamientos acerca del “comunitarianismo”, la participación y la movilidad social, era su insistencia en mantenerse dentro de la Constitución y del respeto a la ley. Si la UP era capaz de neutralizar al PDC en ese punto entonces lo privaría de su iniciativa ideológica. Porque aun cuando algunos líderes de la oposición (como el mismo Frei) creyeran personalmente que un régimen autoritario reaccionario era una alternativa

preferible a los esfuerzos de la UP por construir el socialismo esgrimiendo la Constitución en beneficio propio, ¿cómo hubieran podido esos mismos líderes presentar sus ideas públicamente, o movilizar apoyo, sin provocar una profunda escisión dentro de la Democracia Cristiana y empujar en brazos del gobierno a muchos de los miembros más indecisos y reformistas del partido?

Sin duda esta formulación exagera la postura de la UP en el problema de la "lucha ideológica" e implica un cierto grado de complacencia, que de hecho muy pocos chilenos experimentaban. Sin embargo, es importante presentar esta posición con tanta fuerza para poder probar con mayor efectividad sus debilidades, mismas que fueron evidenciadas por la experiencia. Las podemos agrupar bajo tres encabezados: 1) con respecto a la organización de los medios de comunicación de masas; 2) con respecto a las implicaciones que supone una clara ideología; y 3) el punto crucial que se refiere a la naturaleza de la mentalidad reaccionaria que se desarrolló para derrotar a los optimistas proyectos de la izquierda.

En cuanto a la organización de los medios de comunicación de masas, lo esencial de la situación puede deducirse de la discusión anterior en torno a la polarización y a la competencia partidista. Para 1970 la prensa, la radio, la televisión, etc., estaban todos muy claramente divididos conforme a su orientación política. En 1972 se estimó que seis periódicos nacionales identificados con la oposición vendían 540 000 ejemplares diarios, mientras que cinco que apoyaban al gobierno vendían solamente 312 000. De manera similar, de las 150 estaciones de radio de onda larga, 115 expresaban los puntos de vista de la oposición. Los canales de televisión también pesaban en contra del gobierno (de un total de tres, dos estaban controlados por la oposición). Aunque para los europeos y los norteamericanos pueda parecer normal que gobiernos electos de izquierda se enfrenten a estos problemas con los medios de comunicación masiva, la situación chilena sorprendía por terriblemente anómala, a muchos observadores latinoamericanos (en términos generales acostumbrados a un tratamiento respetuoso de quien quiera que se encuentre en el poder). Esta situación fue empeorando a medida que se intensificaba la lucha política y los medios noticiosos se apartaron todavía más unos de otros, aumentando los abusos y la parcialidad en sus informaciones, hasta que finalmente se contradecían virtualmente en toda interpretación en cuanto al país, así como en muchos de los hechos mismos. El cambio en las proporciones controladas por los contrincantes fue pequeño —pero propagandistas de ambos campos tenían que sus enemigos se apoderaran de cualquiera de sus propios canales. De esta manera se fue desarrollando una compleja lucha legal por el control de una difusora de televisión que

apoyaba al gobierno y que la UP estuvo a punto de perder, mientras que por otra parte la prensa de la oposición lanzaba una gran campaña en favor de mantener el material informativo en manos privadas, blandiendo la amenaza del fin de la libertad de prensa en caso de que la compañía papelerá del ex presidente Alessandri fuera expropiada o conducida a la bancarrota por el control de precios. La tensión ya había llegado al clímax aun antes del golpe, pero la UP nunca contó ni con los medios ni con la determinación para suprimir a los medios de comunicación opositores, a pesar de que era evidente que se habían convertido en un foco definitivo de inspiración y de coordinación para los conspiradores.

En segundo lugar, son bien conocidas las desventajas de adoptar una perspectiva ideológica demasiado rígida; por ejemplo, con frecuencia el enemigo puede predecir las reacciones, de quienes sustentan determinada ideología, en las más variadas circunstancias, y una grave confusión tiende a surgir cuando se presenta un desarrollo que se aparta del marco esperado de interpretación. Es, desde luego, un rasgo general de los movimientos revolucionarios el que cada uno de los cambios que intentan se justifiquen con un cuerpo de proposiciones ideológicas que necesariamente provocan un alto grado de discusión ideológica entre los innovadores mismos. Esa controversia tiende a erosionar su solidaridad a medida que avanza el proceso revolucionario. En cambio, la solidaridad de los contrarrevolucionarios aumenta con el tiempo, cuando se concretizan las consecuencias del examen crítico de las bases de la sociedad. La derecha puede desechar sus ya desgastados mitos y escrúpulos y, la urgencia por volver a cualquier precio a las condiciones anteriores de orden, seguridad y jerarquía se convierte en su preocupación fundamental. Como el fermento del debate ideológico tiende a dividir en las situaciones revolucionarias a los radicales y a unir a los conservadores, hasta ahora los regímenes revolucionarios, para estabilizarse, siempre han tenido que acallar a sus teóricos imponiendo alguna institución autoritaria que certifique nuevas ortodoxias. En Chile ciertamente, a medida que se intensificó la lucha, fue necesario un mayor esfuerzo por mantener dentro de ciertos límites las disparidades ideológicas de la izquierda. En cambio ninguna iniciativa fue capaz de detener el creciente consenso de la derecha. Más todavía, cuando para los militantes de la UP se hizo evidente que las realidades del poder eran muy distintas de las postuladas y que las promesas inherentes al lenguaje ideológico difícilmente serían realizables, los ideólogos de la izquierda tendieron a asirse todavía con mayor desesperación a categorías de interpretación tales como los "problemas de transición al socialismo" que les devolvieran la confianza. (Gabriel Fra-

chon subraya el contraste entre el lenguaje ideológico utilizado por la *burguesía de izquierda* y el realismo pragmático de las clases populares; ver: *Esprit*, París, noviembre de 1973.) Alain Touraine afirma acerca de los intelectuales marxistas chilenos: "Aquí la ideología impera al punto que la acción revolucionaria parece más 'expresiva' que instrumental. Qué lejos está América Latina del leninismo!" (*Vie et Mort du Chili Populaire*, París, 1973, p. 62.) La quema de libros que se ha efectuado desde la caída de Allende y el asalto masivo que ha sufrido toda la comunidad académica chilena reflejan las profundas reacciones antintelectuales que se han encendido entre amplios sectores de las clases medias por lo que pueden ahora considerar una época en la que teóricos poco prácticos, hipnotizados por ideas extranjeras digeridas a medias, trataron de trastornar las verdades esenciales de la existencia social del país.

Esto nos conduce a la naturaleza de la mentalidad reaccionaria que surgió en los dos últimos años del régimen de Allende (entendemos por "reaccionaria" simplemente una visión que rechazaba por completo todas las innovaciones sociales de la UP). Es cierto que las fuerzas dispersas de la oposición no estaban adheridas a un programa alternativo, positivo y coherente. Por el contrario, muchos de los ciudadanos comunes de la oposición, desde mi punto de vista, rechazaban el pensamiento racional para revertir a fuentes emotivas fundamentales de resistencia —el orgullo nacional (que degeneró en xenofobia y aun en antisemitismo), convicciones como la de que la sociedad estaba siendo afectada por un cáncer o que los obreros políticamente articulados habían sucumbido a una especie de enfermedad, entre otras. Obviamente estas opiniones variaban conforme al grado de sofisticación del individuo. Un argumento racional bastante poderoso en contra de la ideología marxista prevaleciente sostenía que en el resto del mundo esas ideas se habían abandonado o habían sido desacreditadas hacía treinta años —sólo algunos chilenos aislados podían todavía creer que el marxismo era una técnica científica indispensable para evaluar la futura y necesaria evolución de la sociedad. En los periódicos de derecha se podían encontrar argumentos a diferentes niveles de sofisticación. Una familia burguesa podía encontrar en los periódicos de la mañana mensajes como éstos: para el marido un análisis detallado de la crisis económica; para su hijo, una demostración de que para comprar un coche chico nuevo tendría que pagar todo su salario de cinco años; para la esposa, un reporte de los planes del gobierno para difundir a través del sistema escolar una serie de ideas odiosas, y para la hija, la revelación de que la belleza chilena estaba a punto de desaparecer, puesto que el maquillaje importado ya era imposible de conseguir. Todos ellos

veían también un mapa de América Latina, sin comentario, que mostraba la alta proporción de regímenes militares en el continente. Un único pensamiento subyacía bajo estos mensajes, el cual no requería de un programa u organización formal, puesto que su contenido era puramente negativo— “esto debe terminar, no importa el precio”. Esta reacción fue más poderosa, irrefutable o indiscutible de lo que cualquier otra ideología articulada de la derecha hubiera podido ser.

vii. *Los militares*

Por último, aun cuando la UP, más que tomar el poder por la fuerza gobernara de acuerdo con la Constitución, necesitaba todavía de la aquiescencia del ejército. De acuerdo con un análisis marxista convencional, los militares pueden considerarse como el último recurso del estado burgués para defender sus derechos de propiedad. En varios países latinoamericanos esta imagen corresponde a los hechos, pero los líderes de la UP sabían que no siempre era así. Por ejemplo, sabían que algunos militares, como los peruanos o los argentinos, podían en ocasiones adoptar una política “nasserista” que pusiera énfasis en el antimperialismo en lugar de apoyar a las inversiones extranjeras. En el caso chileno no había razón alguna para creer que los militares como un todo podían sentir algún tipo de lealtad hacia los banqueros, los empresarios o los inversionistas extranjeros que estaban siendo desposeídos. Durante los dos regímenes anteriores la paga militar había permanecido de tal manera rezagada con respecto a las condiciones imperantes en la empresa privada o aun en la administración pública, que muchos oficiales ambiciosos y con mentalidad mercantilista habían abandonado la vida militar, dejando tras ellos una conscripción cada vez más resentida y radicalizada. De manera que el cuerpo de oficiales no era necesariamente inmune a las ideas progresistas si éstas se presentaban en términos patrióticos. Después de todo el mismo Partido Socialista había sido fundado por el suegro de Allende, el coronel Marmaduke Grove. (Además, Robert Moss, *op. cit.*, p. 160, señala que aparentemente casi la quinta parte de los oficiales del ejército eran francmasones, como Allende y el general Prats. No obstante, no es muy clara la exactitud e importancia de esta información.) Así pues, Allende evidentemente esperaba que, si se podía dar confianza a los pequeños propietarios y mantener el orden constitucional, su posición como Presidente le permitiría educar y manipular al cuerpo de oficiales, induciéndolo a llegar a un acuerdo con el gobierno y posiblemente hasta a identificar a las diversas instituciones militares, como tales, con la transformación social que había emprendido.

La estructura militar recibió una generosa cantidad de dinero y honores. La administración de Allende concedió una altísima prioridad a sus pretensiones corporatistas. Se alentaba a los oficiales inteligentes y se les asignaban puestos importantes en la administración civil; se respetaron todos los puntos sensibles de sus derechos tradicionales y se construyó una red sustancial de influencias progubernamentales en los niveles superiores de la organización militar. Entonces ¿por qué fracasó tan estrepitosamente la fórmula de la UP? La explicación no se encuentra en un error táctico serio o en la falta de vigilancia del Presidente. Es cierto que los elementos del MIR dentro de la coalición gubernamental intentaron, con poco éxito previsible, infiltrar los rangos inferiores, y es indudable que estas actividades que amenazaban a la jerarquía militar enajenaron las simpatías hacia el gobierno de muchos oficiales, de la misma manera que horroizaron a la clase media en general. Pero la mayoría de las actividades de este tipo se dieron apenas en los últimos meses, y hay señales de que, aun sin la provocación de la izquierda, los rangos superiores del cuerpo de oficiales giraban en todo caso en torno a una posición radicalmente antigobiernista. Desde fines de 1972 parecía que los oficiales dirigentes que habían apoyado al gobierno estaban sujetos a una presión cada vez mayor por parte de sus colegas para desistir de él, y en el caso de que eligieran conservarse leales al gobierno en vez de solidarizarse con sus compañeros, se convertían en el blanco de violentos ataques por diferentes flancos. El mismo general Prats, comandante en jefe, le dijo a un periodista en 1972:

La resistencia al gobierno está representada principalmente por las clases empresariales y profesionistas... apoyadas por la mayoría parlamentaria y por los sectores más influyentes de los medios de comunicación de masas. En estas circunstancias se puede usted imaginar la fuerza de las presiones psicológicas que actúan sobre el ejército, y también resulta fácil entender que los ataques más sutiles y penetrantes se concentran en el Comandante en Jefe. (Ted Córdoba-Claure, *Chile sí? Los Primeros 800 Días*, Buenos Aires, 1973, p. 80.)

Como consecuencia de esas presiones, muchos de los oficiales más capaces y progresistas de los cuales dependía Allende perdieron su influencia en el ejército donde adquirían preeminencia oficiales menos complacidos y tal vez menos escrupulosos.

¿Por qué rechazó el grueso de los oficiales la visión y el ejemplo de sus colegas que inicialmente ocupaban una posición más elevada e influyente? Sin duda alguna muchos habían creído desde siempre que las

simples virtudes militares de jerarquía y obediencia eran preferibles a las excitadas discusiones acerca de la participación, la igualdad y la revolución (lenguaje que no era exclusivo de los marxistas, sino que también empleaban muchos democristianos). Sin embargo, para entender el triunfo de estas posiciones es necesario recordar la polarización de la opinión pública civil, que prácticamente imposibilitaba, aun a los observadores chilenos más desapasionados, equilibrar los argumentos de ambas partes. En vista de que casi todos optaban por alguna de las dos interpretaciones de los acontecimientos y rechazaban cualquier idea discordante, es de suponer que los oficiales comunes no eran más dados que los intelectuales chilenos a atormentarse con complejos dilemas morales (para 1973 prácticamente todos estaban comprometidos con alguna de las partes). Entre los factores determinantes en la explicación de la sólida decisión de los oficiales comunes por la posición de la derecha deben haber contado el origen de clase y la educación, los periódicos que leían —y por último aunque no por ello menos importante—, la opinión de sus propias esposas. Después de todo, cuando Roy Alien Hansen llevó a cabo una encuesta entre 48 altos oficiales del ejército chileno en 1964/65, se encontró con que 18 pertenecían a la clase alta, 23 a la clase media y sólo siete a la clase media baja. El origen de clase era una determinante importante de las oportunidades de un subteniente de ascender a nivel de general. Cuando se les preguntó cuáles eran las ocupaciones de cinco de sus mejores amigos civiles, el 86 por ciento mencionó a directores de empresas o profesionistas, 8 por ciento a terratenientes, pero ninguno mencionó a empleados u obreros. Además el 55 por ciento de los oficiales había permanecido en Estados Unidos un promedio de 14 meses. (Ver: *Military Culture and Organizational Decline: A Study of the Chilean Army*, Universidad de California, Los Angeles, 1967, microfilm, citado en *Causa Marxista-Leninista*, Núm. 21, Santiago, junio-agosto 1971, pp. 23 s. Esta publicación chilena también afirma que entre 1950 y 1965, 2 064 oficiales fueron entrenados en territorio norteamericano y que desde 1968 todos los cadetes de la Escuela Militar habían recibido dos meses de entrenamiento antiguerrillero en la zona norteamericana de Panamá.) La consecuencia era obvia. A lo más que Allende podía aspirar era a que el cuerpo de oficiales se mantuviera neutral para evitar divisiones y derramamiento de sangre. Pero mientras lo hicieron, los transportistas pudieron sabotear la distribución sin temer a la represión y pequeños grupos terroristas podían continuar su campaña de violencia, incluyendo el asesinato del agregado naval de Allende (una figura clave en la obstrucción de la subversión en la Armada) y la explosión de puentes y de postes eléctricos. Entre tanto, la prensa de derecha y los partidos de la oposición

seguirían proporcionando información distorsionada a la clase media, que estaba dispuesta a creer que cada atrocidad era un movimiento maquiavélico instigado por la Presidencia. Al final, la mayoría de la opinión militar aceptaría la idea de que las tensiones sociales del país sólo serían resueltas si se recurría a la represión. Planteado en estos términos, el único problema del ejército era de qué lado reprimir; en este sentido la derrota de la UP estaba esencialmente garantizada por las preferencias de clase del cuerpo de oficiales.

Más de un mes antes del golpe fue asesinado el agregado naval de Allende (casi seguramente por terroristas de derecha) y entonces la Armada purgó a los partidarios de la UP y se convirtió en un sólido e implacable núcleo de conspiración antigobiernista. Sin embargo, no fue sino hasta fines del mes de agosto que los opositores de Allende en el ejército fueron capaces de obligar a Prats a renunciar. Entonces la mayoría opositora en el Congreso decidió ignorar las amplias concesiones que habían obtenido del Presidente y declarar efectivamente que su presencia en el poder era ilegal (aun entonces, según el informe de una persona que asistió a una reunión de los líderes de la UP, algunos socialistas pensaban que era posible una escisión dentro del ejército y que con ello, más el apoyo de la clase trabajadora, sería suficiente para que la UP triunfara en una posible guerra civil. No obstante, los comunistas sostenían que era fundamental realizar de inmediato un plebiscito porque, cualesquiera que fueran sus resultados, era preferible esa alternativa a perder una guerra civil). El 11 de septiembre, la Junta poseía una arrolladora superioridad militar; sin embargo, no logró atraerse a todos los oficiales ni a todas las unidades, y existen evidencias de lucha *dentro* de las propias fuerzas armadas, que aparentemente duró varios días después del golpe y costó las vidas de cientos de soldados. Aunque la mayoría de los estrategas de la UP parecen haber reconocido desde el mes de agosto que sus días en el poder estaban contados, aparentemente la ferocidad y el extremismo del golpe, cuando finalmente éste ocurrió, sorprendió a muchos de ellos.

IV. ¿CUÁLES SON LAS ENSEÑANZAS?

A partir de una posición de gran debilidad tanto interna como internacional en 1970, el intento de la UP de lograr una drástica redistribución sin recurrir a la represión conllevaba obviamente un alto riesgo. De hecho, de acuerdo con algunos comentaristas, las disensiones a las que se enfrentaba la "vía chilena" eran de tal magnitud que su fracaso no ofrece ninguna enseñanza general en cuanto a la viabilidad de una revolución

social no violenta. La versión más radical de este argumento subraya un contexto internacional desfavorable, mientras que la versión liberal pone énfasis en la imposibilidad de llevar a cabo tan riguroso plan sin contar con una mayoría institucional. Sin embargo, en este caso optamos por considerar que, a pesar de las dificultades planteadas por la situación internacional, éstas no eran insuperables: los precios del cobre eran relativamente bajos, pero también lo era la dependencia de Chile con respecto al mercado norteamericano; aunque se agotaron fuentes de crédito muy importantes hubo la posibilidad de sustituirlas; puede ser que Nixon haya favorecido malas jugadas, pero de hecho el apoyo al intervencionismo en Estados Unidos era débil. En el plano interno la UP también era relativamente vulnerable, pero no por ello carecía de considerables reservas de energía; la democracia chilena puede haber abrigado en ella misma tendencias autodestructivas, pero era más flexible y fuerte que cualquier otro orden constitucional latinoamericano o algunos en Europa occidental; si bien en un principio la base electoral de la UP era estrecha, pudo probar sus posibilidades de ampliación aun en condiciones políticas y económicas adversas; también era grande su capacidad de reclutamiento y educación de nuevos activistas, así como su capacidad para emprender una multiplicidad de tareas nuevas. Ciertamente es que no logró capturar una mayoría ya sea en el Congreso o a través de un plebiscito, pero ninguna de las dos cosas constituía una predeterminación, tampoco lo era la pérdida final del apoyo del ejército. Puede afirmarse que la ausencia inicial de una mayoría de la UP no fue un obstáculo insuperable para la "vía pacífica". Por ejemplo, Allende no era el único que pensaba que después de octubre de 1970 el PDC podría dividirse en beneficio de la propia UP —en una ocasión, el mismo Tomic afirmó ante el ala izquierda de su partido, que podían contar con que el 90 por ciento del mismo los seguiría y que tendrían que expulsar al 10 por ciento. Inclusive en 1971 llegó a parecer factible que *El Mercurio* optara por una línea gobiernista, como resultado de la campaña llevada a cabo por Sonia Edwards, un miembro de izquierda de la familia propietaria de las acciones de este periódico. Por último, serían necesarios varios golpes de mala suerte de la UP para anular el feliz accidente de que en octubre de 1970 el segundo en la jerarquía como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas fuera el amigo de confianza de Allende, el general Prats. Así pues, al principio ni el equilibrio de fuerzas en el exterior ni en el interior era por sí mismo una evidencia desfavorable suficiente para que la UP tuviera la seguridad del fracaso de la "vía pacífica". Sin embargo en poco tiempo se esfumaron muchas de estas esperanzas, en parte a causa de los errores tácticos de la UP, pero más que nada como consecuencia de su

estrategia política. Si esto es así, entonces la experiencia chilena *sí* ofrece algunas enseñanzas pero ¿cuáles?

Algunos opinan que la izquierda chilena se debió haber negado a ocupar el poder si no lograba un compromiso de participación conjunta en el poder con la Democracia Cristiana. Aparentemente al menos ésta es la lección que para su propio país ha tomado el Secretario General del Partido Comunista italiano (*Rinascita*, 12 de octubre de 1973). Es discutible el hecho de que esa política aun en Italia sea siquiera compatible con la unidad de la izquierda (por no hablar del logro de una redistribución sustancial), pero como aparentemente la democracia chilena era más sólida que la italiana, tal vez, pueda aplicarse a la UP una versión más flexible de esta enseñanza. ¿Hubiera podido llegar al poder sin el PDC y aun gobernar sin él los primeros seis meses, si hubiera adoptado una política económica más "responsable" y una estrategia política menos sectaria, para en última instancia llegar a un compromiso con el PDC en vez de dividirlo? El presente trabajo sostiene que en 1971 otra estrategia económica era factible, la cual con un costo electoral de corto plazo, le hubiera concedido a la UP una mayor capacidad de maniobra en 1972. No obstante, Allende no podía sacrificar mucha fuerza electoral o ímpetu político, y tampoco podía mostrarse demasiado conciliador con un partido cuyos líderes, a la simple noticia de su victoria electoral, habían respondido con consideraciones respecto a las posibilidades de un golpe de Estado. Más todavía, en el contexto de la historia chilena, Allende tenía toda la razón para creer que ni una mayoría en el Congreso ni un plebiscito bastarían para que los grupos hasta entonces dominantes aceptaran la perspectiva de un régimen encabezado por la UP. Su política necesitaba tanto de una mayoría institucional como del apoyo masivo organizado. Pero si se quería aferrar al poder en ausencia de ambos elementos hubiera tenido que abandonar los objetivos redistributivos de la coalición. Sólo podría obtener el apoyo que le era indispensable si se mantenía la unión y el momentum de la izquierda. Estas consideraciones exigían la movilización aun cuando ello significara serias fricciones con el ala conservadora del PDC. En este contexto, la convicción de la UP de que la polarización beneficiaría más a la izquierda que a la derecha merece comentarse. La sociedad chilena era apenas semindustrializada y extremadamente inequitativa, lo cual significaba que una amplia mayoría de la población tenía mucho que resentir y relativamente poco que perder. Pero si Chile se mantenía políticamente desmovilizado, gran parte de esa mayoría seguiría dependiendo por el resto de su vida de los favores del sector más acomodado, y en un cuadro tan desfavorable las medidas reformistas del gobierno de la UP serían minadas o sencillamente borra-

das. Además, los líderes de la UP no únicamente creían que la movilización “mejoraría la correlación de fuerzas sociales” en favor de la redistribución, yo creo que muchos también consideraban que la izquierda se vería a largo plazo fortalecida, *aun cuando fuera derrocado el gobierno allendista*, siempre y cuando se mantuviera movilizada y unida en tanto estuviera en el poder. De acuerdo con este análisis el PDC nunca hubiera respaldado (a menos de que se dividiera) el grado de redistribución social y de cambio político estructural que era esencial para los líderes de la UP.

Evidentemente muchos de ellos hicieron un cálculo erróneo de los riesgos a que se sometían. En retrospectiva, la consecuencia más lamentable de ello fue una subestimación del grado en que el proceso de movilización de la izquierda, en vista de lo precario de su situación en el poder, también fortalecería a los enemigos más radicales de la UP, minando con ello las garantías institucionales que durante tanto tiempo habían protegido a las organizaciones socialistas de masas. La creencia (o esperanza) de que aunque Allende cayera la izquierda se fortalecería, se basaba en la idea de que no existía una base social permanente para el establecimiento de una dictadura reaccionaria. Y precisamente la experiencia chilena demostró que un gobierno socialista militante, cuya situación es particularmente precaria, podía ofrecer semejante base social a sus peores enemigos.

Suponiendo que Allende hubiera disciplinado al MIR y que hubiera sostenido más resueltamente la Constitución, ¿le hubiera sido posible, aun con una oposición moderada del PDC, llevar a cabo su programa y cumplir con su periodo? Ya se ha dicho bastante acerca de la intensidad, y en ocasiones irracionalidad, de las reacciones de la clase media a cambios que aparentemente la dejaban a merced de personas inferiores, irresponsables y poco educadas (un síndrome que no es exclusivo de Chile, aunque bajos formas menos extremas). La duda se plantea sobre qué tan moderado hubiera podido permanecer bajo tales circunstancias el PDC, en condiciones óptimas. Había además otra fuente de problemas. Una vez en la oposición, el PDC estaba casi obligado a exigir medidas más estrictas en contra de la agitación social, que las que se consideraron electoralmente aceptables cuando ellos estaban en el poder. Si la UP quería llevar a cabo una amplia redistribución, satisfaciendo al mismo tiempo las demandas del PDC en cuanto a los derechos de la oposición, tenía que estar dispuesta a tolerar el lenguaje agresivo y las reacciones violentas de sus opositores, en cuyo caso también tenía que tolerar la libre expresión de la disensión y de los conflictos que podían surgir entre sus propios seguidores. (Por ejemplo, no le hubiera sido tan fácil llamar a

la policía para responder a una manifestación provocativa del MIR, si no recurría igualmente a ella en contra de una manifestación equivalente de la oposición. De hecho, Allende tuvo que tolerar más *faits accomplis* de la izquierda, en la medida en que aumentaba la escalada de violencia de la derecha sin el repudio del PDC). Si quería frenar a los ultras la única alternativa a la represión era adoptar su propio lenguaje y ofrecerles medios más ecuánimes para que pudieran conquistar algunos de sus objetivos. Pero semejante estrategia por parte de la UP hubiera sido considerada por sus enemigos como hipócrita y amenazante. Yo creo que ésta es la razón por la cual han sido tan contradictorias las interpretaciones en torno a las intenciones de Allende. Muchos de sus opositores olvidan por completo sus promesas de mantenerse dentro del marco constitucional, ignoran las limitaciones dentro de las cuales se vio obligado a actuar y lo representan como algo menos que un cruel dictador responsable sólo ante Cuba. Yo en cambio considero que Allende se había propuesto mantener la unión y las ilusiones de sus seguidores, para evitar que se repitiese lo que había sucedido en 1938 con el Frente Popular, y no deseaba privarse de los aliados más a su izquierda que necesitaba en un momento en que sus contrincantes se habían aliado a la extrema derecha. En última instancia, aun para sus seguidores resulta todavía ambiguo el significado de la muerte de Allende —para algunos se dio cuenta demasiado tarde de que en Chile el socialismo sólo podía ser instaurado a través de la violencia; y para otros, el Compañero Presidente sacrificó su vida en aras de la democracia y de la justicia social en un país en el que estaban tan profundamente arraigadas las fuerzas de la opresión y de la injusticia. Yo supongo que para él lo más importante era conservar hasta el final el apoyo de ambos grupos.

Así pues, la tragedia chilena subraya las dificultades (algunos dirían aun la imposibilidad) que supone llevar a cabo, por vías no represivas de acción política, una amplia redistribución del ingreso y del poder en sociedades en las que prevalece la desigualdad y la injusticia. Sin duda alguna muchos propietarios en todo el mundo al igual que muchos revolucionarios recibieron gustosamente tal enseñanza de la experiencia chilena, aunque no así los sindicalistas. Muchos intelectuales latinoamericanos han tendido a concluir que no puede haber socialismo sin lucha armada, pero inclusive ellos se enfrentan al problema de que el fin de la mayoría de los intentos violentos por establecer el socialismo ha sido una sangrienta derrota. Tal ha sido desde 1958 la experiencia latinoamericana, y por respeto a ella Fidel Castro dio su aprobación calificada a la vía constitucionalista intentada por Allende. De hecho, aunque la traición militar al gobierno de la UP ha subrayado los riesgos que conlleva

un intento de redistribución masiva sin represión, también ha puesto de manifiesto la tremenda desigualdad que surge en la lucha entre una maquinaria militar moderna y civiles armados, no importa qué tan numerosos sean éstos, o qué tan bien organizados, prevenidos o conscientes estén políticamente.

Traducción de SOLEDAD LOAEZA

GLOSARIO

Antimperialismo. El antimperialismo fue una arma poderosa para la izquierda cubana, pero fue menos efectivo en Chile. En una entrevista concedida al semanario de izquierda *Chile Hoy* (30 de junio-6 de julio de 1972), Allende fue informado de que en una encuesta de opinión realizada se encontró que el 78% de la fuerza de trabajo entrevistada creía que las grandes compañías contribuían al desarrollo del país. Y se le preguntó si "se podía crear una conciencia antimperialista y educar al pueblo... si no somos agresivos hacia el imperialismo". Allende contestó:

Las medidas adoptadas por Chile son drásticas, pero su magnitud y significado no llegan a la conciencia del pueblo. Esa es la obligación de los partidos políticos. Y sin embargo, ¿cuántos años llevan los partidos populares creando una conciencia antimperialista? El Partido Comunista lleva 50 años y el socialista 39, los que tienen de vida. Bueno, y no han podido crear esa conciencia. Y es dramático, porque yo también conozco una encuesta en que se pregunta, ¿cuál es la mejor medida del gobierno?, y el 82 por ciento dice que el medio litro de leche, y el 16 por ciento, la nacionalización del cobre.

Comparemos lo anterior con el resultado de la encuesta de actitudes realizada por Zeitlin, tres años y medio después del ascenso de Castro al poder, entre los trabajadores cubanos. Ellos se referían más a la nueva *posición de Cuba en asuntos internacionales*, a su recién ganada soberanía, como una fuente de orgullo nacional, que los trabajadores de otros (cinco) países. (*Revolutionary Politics and the Cuban Working Class*, Princeton 1967, p. 292). Otra diferencia importante entre Chile y Cuba era la posibilidad, en este último caso, de la emigración a Florida; alternativa abierta para aquellos grupos sociales cuyo equivalente chileno no tenía otra opción que quedarse (dentro del contexto mucho más favorable que les ofrecía la democracia chilena) o resistir.

Bloqueo invisible. Sin duda la crisis de la balanza de pagos debilitó la capacidad de la UP para manejar la economía, y también favoreció la inflación, redoblando así las tensiones políticas. Pero es más debatible la afirmación de algunos voceros de la UP de que la principal causa de estas dificultades era "el bloqueo invisible", dirigido desde Washington. Las cifras provisionales de comercio son las siguientes:

(Millones de dólares)	1970	1971	1972	1973
Exportaciones totales	1 112	985	854	1 367
(a Estados Unidos)	177	76	82	106
Importaciones totales	956	1 082	1 323	1 652
(de Estados Unidos)	344	267	161	n.a.

Dado que las tres cuartas partes de los ingresos chilenos provenían del cobre, el gobierno de Allende resintió mucho la caída de los precios mundiales de este producto que se registró poco después de iniciado su período. El precio promedio de ese metal en las cotizaciones londinenses cayó de \$0.64 por libra en 1970 a \$0.49 en 1971, manteniéndose al mismo nivel en 1972. La demanda se recuperó durante 1973 y a partir de septiembre la Junta pudo beneficiarse de una considerable entrada de divisas. En efecto, el precio del cobre aumentó de \$0.69 en la primera mitad de 1973, a \$0.95 en la segunda mitad de ese año y \$1.14 en el primer semestre de 1974. Al mismo tiempo, la producción chilena, impulsada fuertemente por un sistema de trabajo estricto y disciplinado, logró nuevos récords. Claro que la UP fue infortunada, pero el comportamiento del sector externo fue producto de un ciclo de comercio no planeado y no de una conspiración de tipo político. Mientras que los Estados Unidos, como principal comprador, pudieron, y lo hicieron mediante un acto legislativo, reducir espectacularmente las exportaciones cubanas de azúcar en 1960, tenían poca influencia directa en las exportaciones de cobre chileno, la mayor parte de las cuales iban a Europa o a Japón. Las importaciones procedentes de los Estados Unidos sí fueron afectadas seriamente y esto causó agudas dificultades en ciertos sectores de la economía chilena. Pero Chile era también mucho menos vulnerable que Cuba en este aspecto y la reducción de las provisiones norteamericanas fue más gradual. Ya no fue posible lograr créditos para las importaciones, pero las compras vitales siguieron siendo accesibles si se pagaban en efectivo. En todo caso, para la mayoría de los productos había proveedores alternativos y así las importaciones de Argentina, Australia, Brasil y varios países de Europa occidental aumentaron rápidamente. Se obtuvieron condiciones crediticias favorables, pero la economía chilena no se favoreció mucho porque el renglón de importaciones más importante era el de alimentos, y en los precisos momentos en que el precio del cobre bajaba, se incrementaba notablemente el de la carne y los granos. Aquí también el ciclo comercial fue de mayor importancia que el boicot político.

Había sin embargo, un boicot político de créditos, inspirado por Washington, de parte de agencias como el Banco Interamericano de Desarrollo, para no mencionar al Banco Mundial y al Eximbank; agencias que se supone otorgan créditos en condiciones flexibles. Pero posiblemente Paul E. Sigmund tiene la razón al afirmar que la presión norteamericana produjo "un aumento considerable de las alternativas de fuentes de créditos para Chile que más que equilibraron las reducciones de las fuentes norteamericanas o controladas por los E. U. (Ver "El bloqueo invisible y la caída de Allende", en *Foreign Affairs*, Nueva York, 1971, p. 336).

¿Por qué no fueron mitigados todos estos efectos con la ayuda soviética en la misma escala que la que Khrushchev otorgó a Castro? Al principio, cuando Allende llegó a la presidencia, tenía considerables reservas de divisas y, probablemente, no estaba muy ansioso por convertirse en dependiente de la ayuda soviética. Ade-

más, Allende llegó al poder unos cuantos meses después de que fallaron los planes cubanos de lograr una cosecha de 10 millones de toneladas de azúcar, y al parecer la Unión Soviética daba prioridad, en su limitado programa de ayuda a América Latina, a la economía cubana. Aun así, cuando comienzan a reducirse los créditos occidentales, después de 1970, fueron compensados parcialmente con créditos de los países socialistas. Moss (*op. cit.*, pp. 57 y 80) indica que es posible que Allende hubiera recibido en los dos primeros años de gobierno cerca de 400 millones de dólares para financiar inversiones (de los cuales corresponderían 56 millones a China), pero que estos créditos eran atados o para proyectos específicos. La misma fuente (pp. 202 s.) afirma que Allende esperaba un crédito de 500 millones en divisas convertibles cuando fue a la Unión Soviética, en diciembre de 1972, pero que el acuerdo final (no publicado) fue un tanto desilusionante.

Central Única de Trabajadores (CUT). Después de una década de rivalidad y secesiones, en 1952 los socialistas y los comunistas acordaron competir democráticamente dentro de una organización unificada. Posteriormente, cuando comenzó a crecer la influencia demócrata cristiana dentro de la clase trabajadora (especialmente entre los empleados), el PDC empezó a ganar posiciones dentro de la CUT, aun cuando nunca obtuvo el apoyo suficiente para arrebatar el liderazgo nacional del movimiento a la coalición socialista-comunista. La CUT obtuvo su reconocimiento formal y adquirió mayores responsabilidades con el gobierno de Allende. Para aumentar la participación de la masa en los asuntos del movimiento obrero, en 1972 se introdujo el voto directo para todos los puestos a nivel nacional. (Probablemente la UP consideró esta medida como una forma para tener contacto con los demócrata cristianos sindicalizados en forma directa, y no a través de los líderes de sus uniones). En junio de 1972 se llevaron a cabo elecciones en los sindicatos a fin de determinar la composición partidista del nuevo liderazgo de la CUT. Aunque los resultados fueron objetados y casi seguramente cada una de las partes cometió fraudes en sus respectivos bastiones, los siguientes resultados son razonablemente confiables (tomados de un estudio universitario no publicado y posiblemente ahora implicable):

Comunistas	173 000
Socialistas	148 000
Radicales	26 000
MAPU	26 000
MIRistas	10 000
Otros de UP	16 000
Demócrata cristianos	148 000
Otra oposición	4 000

En números redondos, la oposición obtuvo el apoyo de 151 000 sindicalizados, comparados con 399 000 que apoyaron al gobierno (alrededor de 27.5% y de 72.5). Sin embargo, entre los miembros de los sindicatos de empleados, la oposición fue mucho más fuerte, ganando 63 000 votos en contra de 83 000 en favor de los partidos del gobierno.

En algunos sectores importantes, como el sindicato de maestros, la oposición obtuvo un apoyo mayoritario, en tanto que menos de un 10 por ciento de los mineros del carbón y sólo ocho por ciento de los trabajadores de la construcción votaron en contra del gobierno.

En resumen, aunque los demócrata cristianos estuvieron lejos de ganar el con-

trol de la CUT, obtuvieron suficientes puestos estratégicos a nivel local y regional (en forma notable en el comité regional de Santiago) para debilitar el apoyo del movimiento obrero a la UP. Provocaron huelgas —especialmente aquella llevada a cabo en la mina El Teniente en mayo y junio de 1973— y agravaron la inflación mediante presiones salariales intensas. Irónicamente, al mismo tiempo que las organizaciones pro-gubernamentales de asalariados se volvían más democráticas (y de ahí más vulnerables a la polarización partidista y a la parálisis) los profesionistas y los trabajadores independientes estaban formando *gremios* corporativos, que eran totalmente antidemocráticos y constituían fuertes instrumentos de batalla para la oposición extremista.

Desempleo. El nivel de desempleo más alto alcanzado en el Gran Santiago fue del 10.4% de la fuerza de trabajo, en marzo de 1959. En los sesenta, éste fluctuó entre el 4 y el 7 por ciento, llegando nuevamente al 8.3 por ciento, inmediatamente después del ascenso de Allende al poder, en diciembre de 1970. Las políticas económicas de la UP pronto hicieron bajar esa tasa a menos del 5%, misma que se mantuvo hasta el momento del golpe. Las cifras accesibles más recientes son:

Agosto-septiembre, 1973, 4.1%; octubre, 1973, 5.7%; noviembre, 1973, 4.9%; diciembre, 1973, 5.7%; enero, 1974, 7.5%.

Sin embargo, estos porcentajes subestiman considerablemente el impacto inmediato del golpe sobre el empleo, ya que, según estadísticas de la misma junta, la fuerza de trabajo en el Gran Santiago se redujo en 95 000, o sea el 9.2%, entre agosto/septiembre y octubre de 1973. Los empleados públicos fueron los más perjudicados, como se puede ver en la siguiente tabla sobre empleo en el Gran Santiago:

Número de empleados en:	Agosto/septiembre	Octubre	% de cambio
Administración pública	78 200	59 100	-24.4
Educación	67 600	51 600	-23.7
Salud	45 100	30 800	-31.5

(Banco Central de Chile, Boletín Mensual, marzo de 1974, p. 321.)

Fuerza de trabajo. A fin de entender la lucha política es necesario tener en mente la estructura de la ocupación en Chile. En 1960, los asalariados (la base de apoyo "natural" de la UP) eran todavía una minoría de la fuerza de trabajo como un todo, como se puede ver en la columna 3 de la siguiente tabla. Si sólo consideramos la mano de obra no agrícola, la situación de minoría de los asalariados se acentúa, como se puede observar en la columna 2.

COMPOSICIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, 1960
(Miles)

	1 Agricultura	2 Otros	3 Total	4 1970 (provisional) Total
Patrones	12	21	33	81
Trabajadores por cuenta propia	153	296	449	500
Empleados a sueldo	20	468	488	735
Servicio doméstico	—	196	196	168
Otros	53	113	166	202
Asalariados	424	631	1 055	922
Total de la fuerza de trabajo	662	1 727	2 389	2 607

Movilización popular. Además del reclutamiento a través de los partidos políticos, se creó una red de organizaciones de masa, sobre todo en la última década, con una participación sustancial de los demócrata cristianos, los MIRistas y la UP. Sobresalen cuatro tipos de organización de masas: 1) *sindicatos* de obreros y campesinos, 2) agencias de aprovisionamiento y distribución (JAP); organizaciones de vecinos (centros de madres, etc.), y 4) comités de producción (incluyendo los consejos de vigilancia). En términos de membresía nacional, fuentes pro-gubernamentales calculan que en 1972 había 780 000 trabajadores urbanos sindicalizados (de los cuales 290 000 pertenecían al sector público) y 220 000 en sindicatos campesinos. Cada sindicato tenía en promedio cien miembros. Se habían creado cerca de mil *Juntas de Abastecimiento y Control de Precios* (JAP), sobre todo en Santiago y algunos otros centros urbanos, para combatir el mercado negro y distribuir provisiones a los precios oficiales. Había también mil *juntas* de vecinos reconocidas y cuatro mil centros de madres, los cuales expresaban principalmente las demandas por habitación y servicios básicos en las poblaciones. En contraste, los comités de vigilancia y producción tenían una cobertura limitada, incluyendo tal vez a cien mil trabajadores en empresas grandes, aunque estas organizaciones jugaron un papel estratégico desproporcionado en comparación con su tamaño, en los últimos meses del gobierno de la UP, cuando se crearon *cordones industriales* defensivos en las zonas fabriles. (Ver: F. Castillo *et al.*, "Las Masas, el Estado y el problema del poder en Chile", en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, abril, 1973, pp. 7-17.)

Pobladores. Los "cinturones de miseria" que rodean a Santiago y a otras ciudades chilenas son conocidos como *poblaciones*. En los años sesenta y setenta, sus pobladores fueron reclutados con vigor por todos los partidos políticos rivales. Para 1972 se estimaba que cerca de medio millón de chilenos vivía en las 265 poblaciones de Santiago. De acuerdo con una encuesta realizada en 1971 en 20 poblaciones, que incluían a cerca de 18 000 familias, los autores de la misma identificaron cinco tipos diferentes de campos, cada uno con su propia expresión política, determinada por la composición social de las familias y por su historia política. Tres de estos campos estaban bajo el firme control del PDC, tres estaban encabezadas por los socialistas, tres por el MIR y tres por los comunistas; el Partido Radical, el MAPU y el USOPO controlaban un campo cada uno. En la mitad de los

campos había una oposición política significativa encabezada por uno o más de los partidos rivales, y en tres de los campos menos politizados había un fuerte elemento de "delincuencia organizada". ("Reivindicación Urbana y Lucha Política. Los campamentos de pobladores en Santiago de Chile", *EURE*, Vol. II, No. 6, noviembre de 1972, pp. 67/75 y 80). Otra encuesta reciente concluye que sólo el 19% de los *pobladores* tiene un punto de vista que refleja una *conciencia de clase*, mientras que las 14% eran esencialmente deferenciales y 57% eran "instrumentales" en lo que se refiere a su actitudes hacia las posibilidades de cambio social.

Unidad Popular. En diciembre de 1969 seis movimientos políticos firmaron el *Pacto de la Unidad Popular*, que pretendía ser no sólo una alianza electoral a corto plazo, sino una organización permanente para llevar a la práctica un programa común de largo alcance. Los signatarios fueron los comunistas, los socialistas, los radicales, el MAPU, los socialdemócratas y el API (un nuevo grupo personalista con gran influencia sobre todo sobre los empresarios chilenos de origen árabe). Sin duda los más importantes eran los tres primeros, los cuales ya se habían unido para una elección presidencial —formando el victorioso Frente Popular de 1938, con apoyo sindical, pero liderazgo del Partido Radical. En tres años se rompió esta alianza y fue reemplazada en 1956 por el FRAP, un pacto entre comunistas y socialistas (también con apoyo obrero, pero sin los radicales), que apoyó a Allende en 1958 y 1964. Sin embargo, el Partido Radical, después de 20 años de postura anti-marxista, se vio presionado por las victorias del PDC en 1964-65. De ahí que, reviviendo su tradición de partido anticlerical y de reforma, dio un vuelco profundo hacia la izquierda. Primero se unió a la Internacional Socialista y en 1967 decidió pactar con el FRAP y, de ser posible, lograr el apoyo de la izquierda a un candidato radical, para las elecciones de 1970. Así, en el otoño de 1969, cinco candidatos rivales se presentaron para encabezar a la izquierda en las siguientes elecciones, y en octubre los seis movimientos políticos acordaron crear un comando conjunto (cuyo liderazgo sería rotado cada semana) tanto para seleccionar un candidato de la coalición, como para adoptar un programa común de la Unidad Popular.

El programa y la fórmula para compartir el poder dentro de la UP fueron decididos antes de que lo fuera su candidato. Los seis constituyentes de la UP deberían ser representados en todos los gabinetes bajo la fórmula 3-3-3-2-2-1 (tres ministros de cada uno de los tres partidos más importantes, dos ministros del MAPU y tres que deberían ser compartidos entre los socialdemócratas y el API). Así, el Presidente de la Unidad Popular (que no debería ser un "monarca", como se especificó) renunciaría al privilegio de escoger a sus ministros y a la opción de cambiar las alianzas partidistas a mitad de un periodo (lo que había causado en el pasado tanto resentimiento dentro de la izquierda). Aun más, el programa de la UP se oponía firmemente a "la creación de zonas de influencia en las diversas ramas de la administración pública". Cada nivel de la administración estatal (incluyendo el más alto) debería contener representantes de todas las corrientes que componían el Gobierno Popular, actuar por acuerdo entre ellos y en consulta con las organizaciones obreras y populares. Alain Labrousse ha descrito las consecuencias prácticas de este acuerdo:

Al distribuir los puestos oficiales para la Reforma Agraria, el principio, era permitir a cada partido hacer las nominaciones de acuerdo con los resultados obte-

nidos en las elecciones más recientes... Sin embargo, se necesitaron más de ocho meses de negociaciones antes de tener todos los puestos completos. Con frecuencia un partido no escogía las regiones en que era más fuerte para colocar a sus hombres, sino aquellas en las que no tenía muchos activistas y esperaba conseguir reclutas: Los Radicales administrarían un departamento en el que el diputado fuera un comunista y viceversa. Esto provocaba alianzas de facciones e interminables maniobras. (*L'Experience Chilienne*, París, 1972, pp. 224-285.)

Lo anterior no permitía una administración efectiva, ni tampoco otorgaba mucha flexibilidad de maniobra al presidente o a su gabinete. También introducía un obstáculo más para llegar a un compromiso con el PDC, ya que virtualmente cualquier facción dentro de la UP podía vetar sus términos. También permitió a grupos poco representativos, como API, obstruir las medidas de austeridad (aun cuando los partidos más fuertes tendieron a colonizar a los más débiles, lo que llevó a convertir a sus organizaciones en agencias de empleo). Además, este sistema minó el control central, estimulando el recurso a los *faits accomplis*. Una gran cantidad de tiempo tuvo que dedicar Allende a suavizar los feudos interpartidistas, en tanto que su capacidad para llevar a cabo una política coherente disminuía, ya que aunque el alto mando de la UP era a veces capaz de aceptar rectificaciones en las políticas (notablemente en enero de 1972), no tenía la disciplina y la determinación suficientes para seguirlas.